

24
507

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.
FACULTAD DE DERECHO.

LA PRESCRIPCION EN EL DERECHO MEXICANO
DEL TRABAJO.

T E S I S

QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE LICENCIA
DO EN DERECHO PRESENTA EL ALUMNO:
CRISTOBAL MORA MACIAS.

MEXICO, D.F.



FACULTAD DE DERECHO
SECRETARIA AUXILIAR DE
EXAMENES PROFESIONALES

1986.



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO.

INTRODUCCIÓN.

CAPÍTULO PRIMERO.

ANTECEDENTES DE LA PRESCRIPCIÓN.

a).- En Roma.	Pag. (5-7)
b).- En la Legislación Española.	(7-9)
c).- En nuestra Legislación.	(9-16)
d).- La influencia Civilista en materia Laboral.	(16-17)
e).- Opiniones de varios Juristas de la Materia.	(17-19)
f).- Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	(19-21)

CAPÍTULO SEGUNDO.

LA PRESCRIPCIÓN Y SUS CONCEPTOS.

a).- Opiniones de diversos tratadistas de la materia.	(24-30)
b).- Diversas opiniones sobre su regulación.	(30-49)
c).- Funcionamiento de la prescripción.	(49-51)
d).- Acción y excepción, sus elementos constitutivos y los hechos invocados.	(51-56)

CAPÍTULO TERCERO.

LAS DIVERSAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA LABORAL.

a).- Los artículos 4o., 5o., 123 y 133 Constitucionales.	Pag. (59-76)
b).- Tesis de la Suprema Corte de Jus- ticia de la Nación, admitiendo la constitucionalidad de la prescrip- ción.	(76-81)
c).- Otras tesis similares sustentadas por dicho Tribunal.	(81-87)

CAPITULO CUARTO.

LA PRESCRIPCIÓN Y SU REGULACION EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

a).- Comentarios sobre su artículo rela- tivo.	(90-93)
b).- Prescripción, término para la.- Es de un año cuando se demanda la asig- nación de un empleo, por ascenso, en los términos del Contrato Collec- tivo de Trabajo.	(94-95)
c).- Prescripción en materia laboral.	(95)
d).- Nuestro comentario en cada caso.	(96-137)
e).- Ley del Instituto de Seguridad y - Servicio Social de los Trabajadores del Estado.	(137-141)
f).- Ley del Seguro Social.	(141-152)

CAPITULO QUINTO.

LA CADUCIDAD EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

a).- Regulación en la Ley de la Materia.	(154-155)
b).- Opinión del Maestro Trueba Urbina.	(155-163)
c).- Diferencias y Similitudes con la - prescripción.	(163-166)

CONCLUSIONES.	(166-176)
---------------	-----------

BIBLIOGRAFIA.

I N T R O D U C C I O N

En el campo de las relaciones humanas tienen lugar diversos actos, hechos u omisiones que repercuten en la vida jurídica de toda persona; pero cuando ellos se ligan al factor tiempo, entra en juego la figura jurídica denominada prescripción; es mediante ella que se establecen hipótesis varias en relación al ejercicio de un derecho, a la liberación de obligaciones, a la consolidación de situaciones, o bien, de sanciones que se apoyan en el no hacer en un período determinado. Tales consecuencias despiertan especial interés para la persona, pero particularmente para el estudioso del derecho.

Por tanto, la figura legal que motiva este -- trabajo, también causó inquietud personal y sin pretensión mayor, se intenta expresar un punto de vista en el campo del Derecho Laboral. tratando de contemplar someramente sus orígenes, desenvolvimiento en otras ramas, -- así como criterios sustentados; atendiendo primordialmente a los efectos que se provocan entre los llamados factores de la producción, pues, es necesario observar que la clase obrera amerita cuidado especial al ser la más desposeída.

Cristobal Mora Macias

a).- EN ROMA.

Refiriéndose a los antecedentes históricos del Derecho del Trabajo, el Licenciado Euquerio Guerrero, señala, que en Roma se nos presenta como una estructura orgánica extraordinaria y su armazón jurídica instruyó poderosamente en todo el mundo, admitiéndose aún hoy en día la influencia de sus principios. El trabajo fué considerado como una "res" (cosa) y por ello se identificó en cierta forma como una mercancía, tanto aplicable a quien ejecutaba el trabajo, como al resultado del mismo. Sin embargo, el Derecho Romano permitió distinguir entre "Locatio conductio operarum", que era el contrato que celebraban las partes para el trabajo y la "Locatio Conductio Operis", que venía siendo el resultado de esa actividad. (1)

Por su parte los romanos denominaron la fórmula al centro del procedimiento; el formulario se integra con elementos principales y accesorios, como ejemplo de éstos últimos se menciona a la prescripción, misma que se divide en dos grupos, a saber:

a).- Prescripción "Pro-Actore". Eran advertencias de diversa índole, que se referían al alcance del efecto novatorio de la "Litis Contestatio", al respecto el maestro Guillermo Floris Margadan enuncia como ejemplo, el caso de un pleito sobre algunas anualidades vencidas, a fin de que el Derecho a las prestaciones futuras no quedase consumido por el efecto novatorio de la "Litis Contestatio". (2)

b).- Prescripción "Pro-Reo". Se refiere a advertencias previas, añadidas a la fórmula, a petición del demandado, como lo es la prescripción "Longi Temporis" y que era un medio de defensa ofrecido al poseedor bajo

ciertas condiciones, especialmente que su posesión haya durado bastante tiempo, de tanta importancia que, a través de ésta el término prescriptorio, originalmente la figura del derecho procesal, llegó hasta nosotros como "prescripción", figura de derecho sustantivo, así cuando había un pleito sobre un terreno provincial en el cual el demandado alegaba a su favor la posesión con título (por lo menos putativo), durante diez años (interpresentes) o veinte (interabsentes), el principio de economía procesal requería que, antes de examinar los hechos en que el actor fundaba su acción, se investigase la veracidad de la excepción propuesta por el demandado. De ahí que ésta se colocase a la cabeza de la fórmula. Si resultaba que la "exceptio" en la fórmula, debía de absolverse al demandado, sin necesidad de examinar los hechos en que el actor fundaba su acción. (3)

La prescripción quedó reglamentada en el derecho común y los códigos, siguiendo al francés, fijaron la exigibilidad de la obligación como momento a partir del cual empezaba a correr el término. Las únicas excepciones se encuentran en el Código Civil Español y en el Portugués, más interesante la primera por haber sido el antecedente de nuestro Código Civil.

Momento en que se inicia la Prescripción.

La interpretación del Artículo 328 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, dió lugar a un interesante debate, del que conviene recordar las etapas principales.

El artículo 1967 del Código Civil Español previene:

"Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 3.- La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus servicios y el de los suministros y desembolsos que hubieren hecho concernientes a los mismos. El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren los tres párrafos anteriores, se contará desde que dejaron de prestarse los servicios".

El Artículo 539 del Código Civil Portugués fijaba en un año el plazo de prescripción de las acciones de los domésticos que hubieren sido contratados por un año y agregaba que el plazo se contaría desde la separación del doméstico.

La disposición del Código Español influyó notoriamente en nuestro derecho, habiéndose redactado en los siguientes términos los artículos relativos del Código Civil de 1848.

"Artículo 1095: Prescribe en tres años.... IV.-- Los sueldos, salarios, jornales ú otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio personal.... VI.-- La de los artesanos para cobrar el precio de su trabajo".

b).- EN LA LEGISLACION ESPAÑOLA.

1.- La Ley sobre contratos de trabajo del 21 de Noviembre de 1931 se reprodujo parcialmente, por lo mandado en el Código Civil.

"Artículo 94: Las acciones derivadas del Contrato de Trabajo que no tengan señalado plazo especial, prescribirán a los tres años de su terminación. A éstos

efectos se considerará terminado el contrato: a).- El día en que expire el tiempo de duración expresamente convenido ó determinado según la presente Ley y. b).- El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa ó tácita!"

A diferencia del Código Civil, agrega el Maestro Mario de la Cueva, que señalaba la terminación de la prestación del servicio, fijó la Ley sobre Contrato de Trabajo, la terminación del mismo como plazo inicial para la prescripción. Y la diferencia es de importancia; 1- prescripción se iniciaba al terminar el plazo del Contrato y si éste se prorrogaba, la prescripción corría, no obstante a partir de esa fecha y así sucesivamente para la prórroga. El principio era aplicable a los Contratos a duración indefinida, ya que según el Artículo 21 de la Ley, a falta de éstos, el que señala la costumbre. La prescripción se iniciaba, pues sucesivamente, de acuerdo con los diversos períodos de duración del Contrato: agrega el Maestro Mario de la Cueva, supongamos que las bases de trabajo ó los pactos colectivos ó la costumbre fijarían en un año la duración del Contrato minero, la prescripción se iniciaba cada año por las prestaciones que se adeudaren a los trabajadores durante ese tiempo, y ello no obstante, como decimos que el Contrato se hubiere prorrogado. La regla contenida en el inciso "b" del Artículo 91 se aplicaba cuando la prórroga se refería a pocos días. (4)

Cuando se habló entre nosotros de la Legislación Española, dice el Maestro de la Cueva, no se tuvieron en cuenta estas diferencias que, como se nota, son fundamentales, puesto que en el fondo señalaba un plazo para la prescripción, aún cuando continuara la prestación del servicio.

Algunos autores españoles, sin embargo, interpretaron el Artículo 94 en el sentido del Código Civil, y para terminar estas dudas se dijo claramente en el Artículo 85 del texto refundido de la Ley de jurados mixtos del 29 de Agosto de 1935, que el término de prescripción comenzaría a contarse desde el día en que se practicó la liquidación del alcance correspondiente al trabajador por los servicios prestados. La Ley modificó radicalmente el sistema, acercándose a las legislaciones de los demás Países, que señalaban para la iniciación de la prescripción, el instante en que se hizo exigible la obligación. (5)

c).- EX NUESTRA LEGISLACION.

La historia de la humanidad puede afirmarse que ha sido una lucha constante por alcanzar la libertad y el respeto a la dignidad del hombre. El derecho del trabajo nació bajo éste signo.

El auge del individualismo, doctrina filosófica del liberalismo en que se considera a cada hombre el ob-

jeto y fin de las instituciones sociales, o sea, establecer la superioridad del individuo sobre la colectividad, el crecimiento de los grandes capitales y el surgimiento del liberalismo económico, que sostenía la no intervención del Estado en las relaciones entre trabajadores y patrones, fueron tres causas que unidas condujeron a un régimen de injusticia, pues los poseedores de los medios de producción imponían a la mayoría de desposeídos condiciones de trabajo, cada día más arbitrarias.

El trabajador se encontraba desarmado frente a la fuerza de los grandes capitales, en su perjuicio laboraba jornadas inhumanas y extenuantes por un salario miserable sin derecho para exigir prestaciones económicas en caso de enfermedad, invalidez y muerte; en tanto que las mujeres y los niños entraron a engrosar la clase trabajadora, en competencia con el hombre adulto y en peores condiciones que éste y también sin protección alguna.

La lucha por dignificar el trabajo de la clase obrera, se iba a acentuar a lo largo del siglo XIX. El clamor surgido en todos los Países originó diversos movimientos ideológicos que habrían de proponer diferentes soluciones, en busca de una Justicia que aquellas sociedades negaban a los desheredados.

En México, durante la pasada centuria, no existió el Derecho del Trabajo. En su primera mitad siguieron

aplicándose las reglamentaciones coloniales: Las Leyes de Indias. Las Siete Partidas y la Novísima Recopilación, pero la situación de los trabajadores había empeorado como consecuencia de la inestabilidad social, política y económica de esos primeros años de nuestra vida Independiente.

La Constitución de 1857, consagró la declaración de derechos que establecía los que gozaban los hombres frente al Estado y la Sociedad. La filosofía que se impuso en la Asamblea Constituyente de 1857 fué la libertad, con su sentido individualista, y la creencia de que el libre juego de las fuerzas económicas incluye al poder público de toda intervención en ese importante campo de la actividad humana. Sin embargo, dos veces se elevaron ya en el seno de aquel ilustre Congreso subrayando las injusticias sociales que tal régimen Jurídico propiciaba: Ignacio Vallarta ó Ignacio Ramírez, el célebre Nigromante, quién manifestó con preceptos avanzadísimos para su época: "El grande, el verdadero problema social, es emancipar a los jornaleros de los capitalistas; la resolución es sencilla y se reduce a convertir en capital el trabajo. Esta operación, exigida imperiosamente por la justicia, asegurará al jornalero no solamente el salario que conviene a su subsistencia, sino un derecho a dividir proporcionalmente las ganancias con el Empresario"

Bajo el sistema liberal, que falsamente suponía -- iguales a poseedores y desposeídos, y por el incremento que

alcanzó la industria en los últimos años del siglo XIX, la situación de los asalariados fué cada vez más injusta y así, la explotación y la miseria a la que parecían condenados los condujo, en la primera década de éste siglo, a los hechos sangrientos de Cananea y Río Blanco. Pensamos que nuestros señores legisladores al elaborar la Ley Federal del Trabajo é incluir en élla la prescripción de los derechos obreros así como la caducidad de éstos y - considerar iguales a los desiguales, capital y trabajo, tal parece que aceptaron en toda su dimensión los principios sustentados por el liberalismo económico.

El 10. de Julio de 1906, el Partido Liberal que - dirigía Ricardo Flores Magón, publicó un manifiesto, valiente y generoso programa en favor de una legislación - del trabajo. En él están señalados los derechos que deberían gozar los obreros y los campesinos para dignificar su vida. Pero fué en la Revolución Constitucionalista, en la que el Grito de Libertad de los hombres explotados en fábricas y talleres, militantes en la Revolución, el que originó las primeras leyes del trabajo.

El 8 de Agosto de 1914 se decretó en Aguascalientes la Jornada de nueve horas diarias, el descanso semanal y la prohibición de disminuir los salarios. Posteriormente, el 15 de Septiembre de 1914, en San Luis Potosí; el 19 de Septiembre del mismo año en Tabasco, y en Jalisco el 7 de Octubre, se promulgaron disposiciones que reglamentaban algunos aspectos de las relaciones obrero-pa-

tronales (salario mínimo, jornada de trabajo, trabajo de los menores, etc.)

El 19 de Octubre de 1914, el General Cándido Aguilar, expidió la Ley del Trabajo para el Estado de Veracruz, que principalmente fijaba el salario mínimo, la jornada de trabajo y la protección en caso de riesgos profesionales, y un año después apareció en esa misma entidad la primera Ley de Asociaciones Profesionales.

En el año de 1915 en el Estado de Yucatán, se promulgó una Ley del Trabajo que reconocía y daba protección a algunos de los principales derechos de los trabajadores.

El objeto de haber enunciado brevemente éstos antecedentes del citado artículo 123, es con el propósito de señalar el origen que motivó su reglamentación en nuestra Constitución Política Mexicana, que fué de luchas sangrientas, de explotación, de humillación y de vejación - a nuestra clase obrera, al grado que se los considera como objetos, no como personas humanas; ésos hombres que reclamaban la protección de su dignidad, de su salud y de su integridad física, vienen a recibir con beneplácito tales principios que han quedado plasmados para su seguridad frente a la clase patronal, por lo tanto, como ya hemos expresado en párrafos a través de la prescripción y de la caducidad que indebidamente incluyeron nuestros legisladores en el citado Código Laboral, contraviniendo tanto al origen mencionado como a los propósitos que per

sigue nuestro aludido precepto Constitucional creado por nuestros Constituyentes de 1917, que era la voz de la cla se obrera mexicana.

Siguiendo pués, con los antecedentes históricos - de nuestro derecho laboral y concretamente con la prescripción que en el mismo regula, cabe agregar que esta institución netamente civilista, ya que como antes se dijo, - el Código Civil español en su Artículo 1967 reglamentaba el plazo prescriptorio en el cual debían ejercitarse las acciones, los trabajadores para reclamar sus salarios correspondientes y la obligación de los patrones de pagar dichos salarios.

Tales disposiciones fueron aplicadas a nuestro Código Civil de 1884 en sus Artículos 1095 y 1099 que también hacen mención a la prescripción así como al momento a partir del cual corre dicho plazo.

Nuestros señores legisladores tomando de nuestro Código Civil citado su redacción relativa a la prescripción, aplicaron a nuestro Código Laboral de 1931 en su Artículo (328 a 333), los efectos de dicha institución, y al promulgarse la nueva Ley Federal del Trabajo se aplicó también en los mismos términos; la prescripción es - netamente civilista, en donde por su naturaleza y alcance jurídico sí tiene cabida, pero en el derecho laboral nada justifica su regulación . ya que éste es derecho -

social, nivelador de las relaciones entre el Capital y el Trabajo, pues regula solo derechos personales.

La Suprema Corte de Justicia, vino a apoyar tal reglamentación que en perjuicio de los obreros se hizo respecto de la prescripción de sus derechos, através de sus diversas tésis que ha sustentado sobre este aspecto, adhesión que estimamos indebida é injusta, solo en una de las aludidas tésis Toca 6257/342a. Juan Silva, aun que admite los efectos de la prescripción, hace una interpretación favorable a los trabajadores, pero no obstante que había argumentado que las leyes deben interpretarse de acuerdo con el espíritu de la Legislación Obrera como protectora de los intereses de la clase obrera en la ejecutoria del 24 de Septiembre de 1935, Toca - 464/35/3a. Enrique Agujosa sostuvo la constitucionalidad de la prescripción en perjuicio de los obreros mexicanos, argumentando que "Esta es una Institución de orden público que debe reglamentarse en todas las leyes que fijen el procedimiento para la tramitación de los juicios, precisamente para dar seguridad y firmeza a - todas aquellas situaciones jurídicas que de no estar - definidas, darían origen a numerosas y constantes discusiones que se traducirían en incertidumbre y vacilaciones, aún para la aplicación de la Ley misma".

Argumentación que no aceptamos porque contraviene a los principios del Artículo 123 Constitucional.

Así vemos como nuestros señores Ministros de la Corte se adhirieron con nuestros señores Legisladores, al admitir la constitucionalidad de la prescripción de los citados derechos obreros.

d).- LA INFLUENCIA CIVILISTA EN MATERIA LABORAL.

El derecho del trabajo es un derecho imperativo y como garantía Constitucional, al regular pues, las relaciones entre el Capital y el Trabajo, nació éste como una protesta contra la falsa creencia de que la libertad jurídica coincidía con la igualdad económica, y por ende con la libertad de contratación que solo puede existir entre los hombres colocados en el mismo plano de igualdad; por ésto el derecho del trabajo consagrado en nuestro Artículo 123 Constitucional, el Maestro Mario de la Cueva, denomina al contenido citado en el precepto, Ley como contrato mínimo de trabajo, agregando que más que un límite a la libertad de contratación, el derecho del trabajo es un esfuerzo para establecer la igualdad económica y políticamente; imperatividad que obliga a los patrones a que cumplan y estipulen las condiciones de prestación de servicios por encima de las contenidas en el contrato mínimo, deduciéndose que todo pacto que tienda a restringir ese mínimo de condiciones que previene nuestro Artículo 123 citado, no producirá efecto alguno y quedará desde luego en pleno derecho substituido por la cláusula legal, como se ordena en la Fracción XXVII del referido precepto Constitucional.

El anterior comentario lo hicimos con el propósito de señalar la finalidad social é imperativa de nuestro derecho del trabajo en el que se protege al obrero y se ordena al patrón que se le otorguen sus derechos previstos en nuestra Carta Magna, en tal virtud y atendiendo a la naturaleza y función del derecho del trabajo, no tiene cabida principios civilistas y menos aún aplicarse preceptos que regulan las relaciones de naturaleza civil, en el derecho del trabajo, porque sus funciones son diferentes y regulan también relaciones diversas y de distinta naturaleza; pero a pesar de todo é llo, vemos como desde la aparición del Código Civil de 1884 el Contrato de Trabajo se reguló por sus disposiciones.

e).- OPINIONES DE VARIOS JURISTAS DE LA MATERIA.

Por su parte el Licenciado Euquerio Guerrero, refiriéndose al mismo tema manifiesta: "que después del movimiento Insurgente de 1810, nos encontramos con un largo período casi un siglo, en el que no hay ninguna legislación de trabajo; el liberalismo Europeo tiene aceptación en nuestro medio y entonces la abstención del Estado deja que por sí mismos los factores de la producción busquen su propio equilibrio. Así, al redactarse la Cédula de 1857, surgen los Artículos 4o. y 5o. Constitucionales. Al aparecer el Código Civil de 1884, el contrato de trabajo se regula por sus disposiciones. El rechazo del trabajo como mercancía viene -

a fortalecer plenamente la argumentación que presentaron al analizar las tesis civilistas que han pretendido clasificar el contrato de trabajo, entre alguno de los estudiosos por ellos como la compra-venta ó el alquiler. Las características apuntadas explican que, al movimiento del derecho laboral los juristas entendieron las instituciones dentro de aquellas doctrinas, é inclusive en materia terminología recurrieron a los nombres ya usuales entre los juristas para designar a las instituciones nacies. (6)

Al respecto, el maestro Mario de la Cueva alude que el derecho del trabajo solo conoce la prescripción extintiva y agrega que las reglas generales del derecho civil desde la Ley de 1931 y más acentuadamente en la de 1970, han sido adaptadas a los requerimientos del derecho del trabajo. (7)

El maestro Alberto Trueba Urbina refiriéndose también a la influencia civilista en materia laboral, señala: "Que la nueva Ley como la anterior, utiliza indebidamente los términos de Acción y Derecho, ya que las acciones procesales del trabajo son imprescriptibles y solo pueden prescribir conforme a la Ley los derechos que la misma consigna; agregando que la prescripción laboral es resabio de teorías civilistas, pues las prescripciones son una Institución que ha sido objeto de estudio profundo por parte de los más distinguidos civilistas cuyos nombres no queremos dejar de mencionar por su elevada alcurnia intelectual, especialmente los que cita Nestor Feli-

pe Clemente de Diego, Leopoldo Alas, Demófilo de Buen y Enrique R. Ramos, de los cuales Don Demófilo nos honró con su amistad y tuvimos oportunidad de extasiarnos con la claridad de su talento, pero sus enseñanzas en general fueron tradicionales aunque también hizo importantes incursiones en el campo social. Acepto emocionado el honroso Epíteto de. "Enemigo de la prescripción de los derechos laborales" que me identifica más con los Constituyentes de 1917 que crearon un derecho del trabajo, no solo exclusivo para los trabajadores, sino imprescriptible, y por consiguiente autónomo y completo, no teniendo cabida en él instituciones de rancio abolengo civilista por bellas y hermosas que éstas sean. (8)

f).- TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

La Suprema Corte de Justicia haciendo una interpretación conforme a los principios establecidos por el Artículo 123 Constitucional, manifestó su total acuerdo al señalar que la Ley del Trabajo de 1931 tenía sus propios principios y distintos a los consignados en el Código Civil de 1884, por ello en la siguiente tesis argumentó y ratificó su criterio. Con fecha 4 de Abril de 1935 en el Toca 62/34/2a. Juan Silva, se cedenó al pago de salarios de casi cuarenta años a partir de 1899, señalando que como el Artículo 328 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 nada decía sobre la prescripción, por lo que ha de interpretarse

de acuerdo con el espíritu de la legislación del Trabajo de donde se infiere que si dicha legislación es únicamente protectora de los intereses de la clase obrera, dicho precepto deberá interpretarse de la manera más favorable al trabajador, considerando que la prescripción se inicia a partir del momento en que la obligación es exigible. Aplicó supletoriamente el Artículo 1161 del Código Civil aludido, para interpretar disposiciones vagas é imprecisas como lo era el precepto 328 también señalado.

Pero en la ejecutoria del 24 de Septiembre de 1935. Toca 464/35/3a. Enrique Agujosa, nuestro máximo Tribunal sostuvo su constitucionalidad de la prescripción argumentando que es una institución de orden público que debe reglamentarse en todas las leyes procesales para dar seguridad y firmeza a las situaciones jurídicas y evitar incertidumbres. Argumentando que no compartimos por ser contrarias al espíritu del Artículo 123 Constitucional, dicho Tribunal siguiendo estos principios perjudiciales para la clase obrera, ratificó su criterio emitido en la ejecutoria de fecha 4 de Abril de 1935 y, en la ejecutoria del 12 de Febrero de 1936, Toca 6660/36/2a. Tomasa Godínez y Coagraviados. señaló que la prescripción corre desde el momento en que se hacen exigibles las respectivas obligaciones. Hasta entonces y en ese mismo sentido se hacen hoy las tesis jurisprudenciales apoyando la teoría privatista de los derechos de obreros.

Vemos como la prescripción respecto de los derechos y obligaciones laborales regulados por el Código - Civil Español en su Artículo 1967, pagó en los mismos - términos al nuestro de 1884 en sus preceptos 1095 y -- 1099, pasando de la misma forma a nuestra Ley Federal - del Trabajo, en su articulado del 328 al 333.

CITAS BIBLIOGRAFICAS:

- 1.- Guerrero Euquerio, Manual De Derecho Del Trabajo,-
Edi. Roma S.A. pag 259.
- 2.- Floris Margadant, Derecho Romano, Ed. Esfinge S.A.
pag, 161.
- 3.- Petit Eugéne, Tratado Elemental De Derecho Romano,
Ed. Nacional, pag 272 y 272.
- 4.- De La Cueva Mario, Derecho Mexicano Del Trabajo, -
Ed. Porrúa, pag 779, 780 y 781.
- 5.- Idem.
- 6.- Guerrero Euquerio, Manual De Derecho Del Trabajo, -
Ed. Porrúa, pag 22.
- 7.- De La Cueva Mario, El Nuevo Derecho Del Trabajo, -
Tomo I, Ed. Roma, pag 593.
- 8.- Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Del Trabajo, -
Ed. Porrúa, pag 447.

CAPITULO SEGUNDO.

LA PRESCRIPCION Y SUS CONCEPTOS.

- a).- Opiniones de diversos tratadistas de la materia.
- b).- Diversas opiniones sobre su regulación.
- c).- Funcionamiento de la Prescripción.
- d).- Acción y excepción, sus elementos - constitutivos y los hechos invocados.

a).- OPINIONES DE DIVERSOS TRATADISTAS DE LA MATERIA.

En materia laboral resulta difícil emitir un concepto respecto de la prescripción, primeramente porque es una institución netamente civilista y no debe aplicarse al derecho del trabajo por tratarse de relaciones; jurídicas muy diversas. y en segundo término por su indebida regulación en nuestro aludido Código, pues las consecuencias que trae al operar dicha prescripción son fatales para nuestros obreros y sobre todo las consecuencias tan diferentes que resultan al transcurrir dicho plazo, ya sea en contra de los patrones y en perjuicio de los obreros; pues social, económica y jurídicamente los resultados son muy diversos. Únicamente se puede hablar de prescripción negativa ó liberatoria en el campo de las relaciones laborales, campo en el que opera es más reducido a como sucede en materia civil que resulta más amplio por sus modalidades.

Nuestra Ley Federal del Trabajo regula la prescripción indebidamente, y al hacerlo señala que las acciones de trabajo prescriben en un año contando a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible con las excepciones que se consignan en los Artículos siguientes: en los demás preceptos relativos se agrega que el plazo corre a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las

excepciones que se consignan en los siguientes artículos, en los demás preceptos relativos se agrega que el plazo - corre a partir del día siguiente a la fecha en que se ten ga conocimiento de la causa de la separación o de la falta desde el momento en que se comprueben los errores cometidos o las pérdidas o averías imputables al trabajador, - etc. (Artículos 516 y 517), de la Ley Federal del Trabajo de 1970. En fin, dentro de éstos artículos que constituyen la excepción que la misma Ley contiene (artículos del 517 al 520). se puede observar el momento a partir del -- cual se inicia el plazo prescriptorio y el tiempo que se concede en cada caso para hacer valer los derechos corres pondientes, lo que no sucede en el primer Artículo (516) que constituye la regla general en materia de prescripció n concretándose únicamente a señalar el tiempo, no así el - momento de inicio ya que solo agrega que debe contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible.

El maestro Alberto Trueba Urbina señala que la prescripción tiene lugar cuando ha transcurrido el tiempo que fija la Ley para el ejercicio de un derecho. (1) Por su parte el maestro Mario de la Cueva, expresa que la -- prescripción negativa es un medio de librarse de las obli gaciones e implica la pérdida del derecho correlativo. Y agrega considerando ésta desde el transcurso del tiempo, deje de cumplir las obligaciones que la Ley impone. Y - a la inversa, consideramos la prescripción desde el punto

de vista del obrero, aparece como un abandonado de las acciones que le corresponden en contra de su patrón; -- abandonado que en el fondo es una renuncia a los derechos que las leyes le conceden estipulando también que el de recho del trabajo solo concede la prescripción extintiva ó liberatoria. El licenciado Enquerio Guerrero opina que en materia laboral solo se puede hablar de prescripción negativa ó liberatoria y que dentro del derecho común existen normas aplicables a todas las ramas del derecho que procuran la estabilidad en las relaciones humanas mediante la extinción de determinados derechos por el solo transcurso del tiempo sin que sean ejercitados con la consiguiente liberación de las obligaciones que les fuesen correlativas. (2) (3) (4)

Por su parte, nuestro máximo Tribunal Federal refiriéndose a la prescripción, ha emitido la siguiente tésis indicando como opera ésta y la causa de élla: "El fenómeno de la prescripción opera por el transcurso del término legal y en ausencia de cualquier medio interruptivo. Amparo Directo 4931/1955. Julián García Gómez. Resuelto el 10 de Octubre de 1956. 4a. Sala.

Otra de las tésis sustentadas también por la Suprema Corte de Justicia es la siguiente: Prescripción Efectos de la .- La Institución de la prescripción tiene por objeto la consolidación de las situaciones jurídicas por el transcurso del tiempo, de tal manera que -

si una acción no se ejercita dentro del lapso que la Ley permite, la situación que se debería de modificar por el ejercicio de dicha acción ya no es posible que se cambie porque ya pasó el tiempo dentro del cual pudo hacerse. -
(5)

No compartimos la idea de que la prescripción tenga por objeto la consolidación de las situaciones jurídicas como lo ha manifestado la Corte, pues el objeto que en este caso se dice perseguir dicha institución es aplicable pero al derecho que regula las relaciones civiles (derechos reales y personales) no así al caso que nos ocupa en que se trata de otro tipo como son las del trabajo, en que solo se ocupa de derechos personales, - lo cual no justifica tal consolidación aludida sino más bien pensamos que viene siendo una restricción de los - derechos obreros, ahora como más adelante comentamos dicha institución debe de desaparecer por ser innecesaria en este tipo de relaciones de trabajo, al menos que en parte se beneficie a los trabajadores concediéndoles - un plazo más amplio que a los patrones, pudiera admitir se en una mínima parte tal consolidación a que se refiere nuestro máximo Tribunal.

La prescripción es una sanción aplicable a - quién por negligencia o deliberadamente abandona su derecho, tal ha sido la opinión del mencionado Tribunal como se desprende de la siguiente tésis, en la cual -

además de admitirse ésta, se habla de sanción a quien no ejercite su derecho dentro de determinado plazo "Esta sala ha sostenido en diversas ejecutorias entre las que puede citarse la relacionada al Toca 11994/32/3a." que la prescripción es una sanción aplicable a quién - por negligencia ó deliberadamente abandona su derecho y que no puede decirse que tal sanción debe aplicarse a quién por el contrario hace en tiempo oportuno expresión de que no renuncia al derecho de ejercitar la acción que le corresponde. (6)

La Doctrina por su parte refiriéndose únicamente la prescripción en sí, distingue dos clases:

a).- Adquisitiva ó también llamada usuapción y de prescripción positiva, que es la adquisición de bienes.

b).- Extintiva o liberatoria y de prescripción negativa, o sea la liberación de las obligaciones.

Agregando que los elementos comunes de una y de otra, son el transcurso de cierto tiempo que se cumpla bajo las condiciones establecidas en la Ley.

Nosotros por nuestra parte consideramos - que la prescripción es la situación jurídica que opera cuando los obreros y los patrones no ejercitan sus derechos dentro del plazo que para ése efecto les concede la Ley. Concepto que con base a la regulación -

que de dicha institución hace la Ley del Trabajo y --
atendiénd^o a los términos de la misma; ahora atendiénd^o
do a la función social de nuestra Carta Magna y en ba
se a sus principios niveladores de los derechos labo-
rales en que la prescripción de los derechos de los -
trabajadores en la prescripción de los derechos de -
los trabajadores no tiene cabida en nuestra aludida
Constitución Mexicana, porque resulta a todas luces -
incongruente con sus principios, en ésa virtud y a -
propósito de ésa contradicción señala que se puede ex
presar el concepto siguiente: Prescripción es la si-
tuación Jurídica que en perjuicio de la clase trabaja
dora considera igual a los desiguales, restringiénd^o
además los derechos obreros, desvirtuando con éll^o la
función social niveladora de nuestro Artículo 123 --
Constitucional, regulándose sin fundamento y base le-
gal para éll^o.

Refiriéndonos a la forma y términos como
se regula la prescripción de los derechos obreros y -
patronales, podemos señalar que en la mayoría de los
casos previstos por la Ley Federal del Trabajo, corres
ponde a los obreros ejercitar sus respectivos derechos
a fin de evitar que transcurra y consecuentemente se
extinga en su perjuicio y, si a ésto agregamos que de
todos los conflictos laborales que surgen ó se origi-
nen, se deben a la falta de cumplimiento de la Ley -
por parte de los patrones; los únicos casos en que -
prescriben los derechos del patrón es en el Artículo

517 Fracción I, pues en los demás relativos extinguen los derechos obreros.

b).- DIVERSAS OPINIONES SOBRE SU REGULACION.

El licenciado Euquerio Guerrero, refiriéndose a la regulación de la prescripción en nuestra Ley Federal del Trabajo y concretamente a la reforma que sufrió el artículo 518 del mismo ordenamiento al ampliarse el plazo a dos meses, opina; "...desprendamos por ello, que cambiando las bases de equidad que contenía el anterior ordenamiento legal, ahora se establecen plazos diferentes en caso de separación; el patrón dispone del período de un mes (artículo 517, Fracción I) y los trabajadores del período de dos meses (artículo 518). Agrega que, resulta difícil comprender que a medida que los obreros se capacitan mejor en el conocimiento de la Ley, se establezcan plazos más amplios para el ejercicio de un derecho - que normalmente puede hacerse valer en el período de un mes. Sin embargo, quizás respecto de centros de trabajo retirados de las grandes poblaciones, la ampliación de este período prescriptivo podría tener alguna justificación...." (5)

Esta es la opinión de nuestro Ex-Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de quien no dudamos de su calidad de Jurista y madurez jurídica - y gran conocedor de los problemas laborales; pero lamentamos, que su opinión aludida sea en esos términos que -

resultan contrarios a los principios y propósitos del artículo 123 Constitucional.

Por su parte, el maestro Mario de la Cueva opina, que el derecho corporativo, por lo tanto, su cumplimiento no dependa ni de la voluntad de los obligados a respetarlo ni del tiempo que transcurra entre el momento en que debió cumplirse y aquél en que se reclama su aplicación. En segundo lugar, la relación de trabajo pertenece al grupo de relación Jurídica que se llama de tracto sucesivo, que son aquéllas cuyos efectos se realizan de momento a momento, lo que permite nitidamente el acto en que se forma la relación laboral y los efectos que van a producirse en el tiempo. Si se relacionan estas consideraciones, encontramos que es preciso distinguir la condición de los derechos consignados en la declaración, en la Ley, en los convenios internacionales y en los Contratos Colectivos y la situación de los derechos concretos que adquieren los trabajadores por el trabajo prestado; una distinción esencial, porque la prescripción no puede referirse a los primeros, que son derecho objetivo, sino exclusivamente a los segundos, que son los que integran la relación acreedor-deudor, y pone como ejemplo el principio de la Jornada máxima de ocho horas y su aplicación, aún cuando durante cinco o más años hubiese prestado su trabajo una persona diez a doce horas por día, no puede prescribir, en cambio; el derecho a exigir el pago de las horas extras trabajadas, sí puede prescribir; tampoco puede prescribir la obligación de pagar el salario mínimo, pero

si el monto de lo que se hubiese dejado de percibir. -
"Ejecutoria de fecha 8 de Abril de 1936, 4a. Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo
685/36/1a. Ferrocarriles Nacionales de México: Las ac-
ciones de los trabajadores pueden tener por objeto la -
reparación de las violaciones, la prescripción no puede
correr, porque el contrato de trabajo es de tracto suce-
sivo y, consiguientemente, sus efectos se realizan cada
día. En contra de esta tésis, no es posible objetar --
que por el hecho de que una violación se haya venido co-
metiendo durante el término de un año, éllo se debe a -
que los derechos, si bien no son renunciables, necesita-
ban ejercitarse en las condiciones señaladas por la Ley,
pero no puede una violación, aún transformada en costum-
bre, prevalecer sobre la Ley, por lo que es procedente
la acción que tiende a evitar que aquélla se continúe -
cometiendo en el futuro. Refiriéndose a la prescrip-
ción de las acciones en los casos de disolución de las
relaciones de trabajo: El maestro Mario de la Cueva,
señala que la nueva Ley introdujo una distinción entre
la facultad del patrón o del trabajador para disolver
la relación de trabajo, situación que se previene en el
artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo y la acción
de los trabajadores para reclamar su separación, asunto
considerado en el artículo 518 de la citada Ley. La ra-
zón que impuso la distinción consiste en que se trata -
de dos problemas diferentes. En la primera hipótesis,
el término de la prescripción es el lapso del cual el
patrón puede despedir al trabajador y éste separarse --

del trabajo y reclamar la indemnización que le corresponde, actos a los que se dá el nombre de Acción, una palabra que se usa a quien con un significado diverso del que posee en el derecho procesal. Así, el despido de un trabajador consistente en el ejercicio de una acción ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, si no es un hecho material, consecuencia de una decisión uni lateral de dar por disuelta la relación de trabajo; - misma situación que se presenta en el caso del trabajador, o en otros términos, el trabajador y el patrón disponen de un término para la realización de un acto material. En la segunda hipótesis, el trabajador está colocado delante de un hecho material realizado y su problema consiste en ejercitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje una acción, reinstalación o pago de la indemnización correspondiente. (6)

Partiendo, de que la Ley Federal del Trabajo de nomina Acción al hecho material de que el trabajador o patrón puedan acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a hacer valer sus derechos que les concede dicho Código Legal a raíz de una decisión unilateral como lo expresa el maestro Mario de la Cueva y, en virtud - de que el mencionado Código Laboral señala que los contratos de trabajo pueden ser de carácter individual o colectivo, como se desprende claramente de lo previsto en los artículos 10, 20, 386 y 404 de la mencionada Ley, de ahí que se hable de acción individual en di

versas tésis, como es el caso de la siguiente: Acción colectiva y aún individual en la misma demanda. Si la parte actora reclama como acción colectiva la creación de un determinado puesto y como acción individual el pago a un trabajador, de las diferencias de salarios que le corresponden por estar desempeñando labores de superior categoría; la Junta no puede condenar el cumplimiento de la acción colectiva si nó se demostró la necesidad del puesto y sólo se acreditó que el trabajador estuvo desempeñando temporalmente por necesidades del servicio, determinadas actividades que no estaban incluidas en su contrato de trabajo. Amparo Directo - 6847/1960. Ferrocarriles Nacionales de México 4a. Sala, boletín 1962, página 45. Otra tésis en la que se hable de acción colectiva que se reclama en nombre de un grupo de obreros, en virtud de un contrato colectivo que los une: Acción Colectiva. La reclamación de un Sindicato para que en cumplimiento de una obligación determinada, sino que se exige el cumplimiento de una obligación contrato en favor de la Organización Obrera y no de determinado trabajador en particular. Amparo Directo 5001/1952. Jesús López T. 4a. Sala boletín -- 1956, página 735.

El maestro Alberto Trueba Urbina, refiriéndose también a la prescripción expresada, opina que el artículo 123 por su naturaleza social, niveladora, com pensadora, proteccionista, tutelar y reivindicatoria -

de los trabajadores, no consignan la prescripción de ninguno de los derechos establecidos en el mismo, en favor de los trabajadores, toda vez que por sí mismos en favor de los trabajadores son imprescriptibles, pues solo así, cumplen su fin redentor de los derechos del proletariado, mediante la recuperación de la plusvalía originaria de los bienes de la producción en el régimen capitalista mexicano. El derecho a la revolución proletaria consigné en el artículo 123 para que los obreros recuperen los bienes de la producción, es un derecho inminente que en un momento dado, transformaría las estructuras económicas y políticas, suprimiendo el régimen de explotación del hombre por el hombre. Por lo tanto; la prescripción de derechos obreros en las leyes laborales de 1931 y en la anterior de 1970, como productos del régimen capitalista, autorizan la prescripción de derechos laborales de los trabajadores inspirada en la teoría privatista del derecho, pero - contraria a la teoría social de las normas sobre - trabajo y previsión social. En cambio, si son prescriptibles los derechos patrimoniales de los capitalistas, de los explotadores, de los patrones, es decir, los "derechos" que les concede no el Artículo - 123, que es un precepto revolucionario, sino la Ley Federal del Trabajo, que es en gran parte burguesa y reaccionaria. (7)

En muchas ocasiones por fuerza mayor o por -- otros motivos, agrega el maestro Trueba Urbina, los trabajadores se ven impedidos de ejercer sus derechos - dentro de los términos de las leyes reguladoras de las relaciones entre trabajadores y patrones, como es precisamente la Ley Federal del Trabajo, por lo que sus - derechos no deben prescribir, y esta tésis, tampoco de be de espantar a nadie que sienta el derecho del trabajo, porque en la entraña del mismo, no está autorizada la pérdida de las acciones que corresponden a los trabajadores, porque el Artículo 123 le dió el significado y los atributos a que nos referimos. En alguna ocasión procedió con justicia la Suprema Corte de Justicia, cuando condenaron al pago de salarios, sin atender a términos prescriptorios, hasta que se consagró el principio burgués de que la prescripción corre desde el momento en que la obligación es exigible y no como se entendió antes, desde el día en que el trabajador fuera separado del trabajo, en la inteligencia de que - en ningún caso peligra la condición financiera de las empresas, sin afectar a la precaria economía nacional de las relaciones de trabajo, es Inconstitucional tratándose de derechos de trabajadores, siendo aplicables únicamente a los derechos patrimoniales de los patrones, "agregando", que la nueva Ley, como la anterior, utilizan indebidamente los términos de acción y derecho, - ya que las acciones procesales del trabajo son imprescriptibles y solo pueden prescribir conforme a la -

Ley los derechos que la misma consigna, considerando que los trabajadores y los empresarios son desiguales en la vida, ante la Legislación Social y en el proceso laboral con motivo de sus conflictos, en - tal virtud, los capitalistas o propietarios de los - bienes de producción, no pueden ser y no son titula - res de derechos sociales, porque representan las cosas, y el derecho del trabajo es para las personas hu - manas; sin embargo, en las relaciones de clase tie - nen derechos civiles y mercantiles que les garanti - zan su "derecho" de "propiedad", y los intereses que - por éste perciben en tanto subsista el régimen capi - talista de producción. (8)

Por su parte el licenciado Baltazar Cava - zos Flores estima, ".... que el término prescriptorio a que se refiere el Artículo 518 de la Ley Federal - del Trabajo, de dos meses, es muy amplio, ya que perjudica la marcha administrativa de las Empresas, por la cobertura de las vacantes que se originan por los despidos. (9)

Vemos como dicho argumento es a todas lu - ces contrario al espíritu obrerista del Artículo - 123 así como el citado Código Laboral, sin embargo, el mencionado profesionista quien colaboró en la Con - federación Patronal de la República Mexicana, pasan - do por alto la condición de la clase trabajadora y

para justificar pilación que se hizo de uno a dos meses, son las Empresas en su marcha administrativa a lo que nosotros agregamos, como en la mayoría de los conflictos laborales que se originan, es debido al incumplimiento de la Ley y de sus respectivas -- obligaciones por parte de los patrones; frente a -- tal situación, y toda vez que esta irregularidad -- es provocada por éstos, son quienes efectivamente deberían sufrir las consecuencias, pero como en la -- realidad, y dada la regulación de la prescripción -- en perjuicio de los desposeídos, no sucede así, pues es la lucha de los desiguales Capital y Trabajo en -- la que siempre resultan afectados "la clase débil", de ahí que ni aún ampliando más el plazo prescripto -- rio, se dañe enninguna forma a las Empresas.

También el licenciado Luis Muñoz, señala su total acuerdo en el sentido de que la prescripción debe ser regulada, y refiriéndose a que la prescripción negativa en el derecho laboral no es contraria al artículo 123 Constitucional, consecuentemente se adhiere a la tésis emitida por la Suprema Corte de Justicia en la que estima, "que la prescripción es como una Institución de Orden Público que debe reglamentarse en las leyes, para dar seguridad y firmeza -- a todas aquéllas instituciones jurídicas que al no es -- tar definidas, darían origen a numerosas y constantes discusiones que se traducirían en incertidumbre y --

vacilaciones, aún para la aplicación de la misma Ley.
(10)

Opinión que fué emitida muy superficialmente ya que debió tomarse en consideración la posición y naturaleza que guarda el obrero frente al patrón.

Nosotros opinamos; que los derechos de los trabajadores son imprescriptibles, como lo señala el maestro Trueba Urbina, con base en los principios sociales niveladores y tutelares de nuestro artículo 123 Constitucional, en el que han quedado plasmados los ideales de los Constituyentes de 1917 que tanto se esforzaron y lucharon para que nuestra clase trabajadora se le considere como persona humana, y no como objeto de comercio, garantizándole su integridad física y social por éllo; vemos en la Fracción XXVII del citado precepto y con el único propósito de proteger a esa clase desválida, previno; que serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se exprese en el contrato, jornadas inhumanas, salario que no sea remunerador, plazo para percibir su pago, lugares de recreo, fondas, tabernas, cantinas, las que entrañen la obligación de adquirir Artículos en determinados lugares, las que impliquen renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho, etc.; agregando en su inciso h), que todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes

de protección y auxilio a los trabajadores.

Por su parte el artículo 107 de nuestra Carta Magna y siguiendo esos mismos principios - en pro de los obreros, estipuló que en materia laboral cuando se trate de la parte obrera y que haya habido en contra del agraviado, una violación manifiesta de la Ley que lo ha dejado sin defensa...." - (Fracción I), con toda justificación se previno en el citado precepto, que tratándose de los obreros quienes acudan en demanda de amparo y protección de la - Justicia Federal, se supla la deficiencia de la queja respectiva, precisamente y considerando que se - trata de la parte débil política, social y sobre - todo económicamente, no así tratándose de los patro-- nes en cuyo caso no opera dicho principio de suplen-- cia de la queja, por ello tomando como antecedente - tales situaciones, nuestra Constitución Política, supo aplicar sus principios legales y sociales a quienes tratándose de desiguales consideró como tales; en esa virtud, resulta infundado y antijurídico incluir en un cuerpo de leyes que tienen como única finali-- dad dar cumplimiento a los principios y fines de - nuestro Artículo 123 del Código Federal, la prescrip ción de los derechos de los trabajadores, pues resul-- ta incongruente y perjudicial para quienes se ha or-- denado proteger sus derechos mínimos; así vemos co mo nuestra Ley Federal del Trabajo, contraviniendo

con dicho propósito y fines, y lo que es más aún en contradicción con su propio Artículo que la misma con tiene, como puede observarse de los que a continuación se transcriben, primeramente en su artículo 2o. se ordena que; "las normas de trabajo tienden a conse guir el equilibrio y la justicia social en las rela ciones entre trabajadores y patrones". Para conse-- guir un equilibrio en favor del obrero, solo se lo gra protegiéndolo y garantizando sus derechos funda mentales en los términos que previene el Artículo - 123 Constitucional, más no incluyendo en el mismo Código Laboral citado, situaciones que arrebatan y restringen los derechos de éstos, como es la pres-- cripción que más adelantante fué incluida, pues con -- éllo es lo único que se ha logrado, es desequilibrar las relaciones entre obreros y patrones, y consecuen temente la justicia social no puede funcionar. En - cuanto al trabajo, se habla de que éste es un derecho y un deber social. No es Artículo de comercio, exi ge respeto para las libertades humanas, así como para su dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud, y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Agrega dicho precepto (3o.), que no podrá esta blecer distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política ó condición social, precepto también incluido pa ra la seguridad jurídica de los obreros, sobre todo

a su libertad y dignidad humana, pues en base a los preceptos que en favor de éstos se establezcan, se irá logrando el equilibrio de que habla el Artículo anterior, como también se hace ordenar que las disposiciones de esta Ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal alguno, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal la estipulación que establezca situaciones inhumanas y al comentar la Fracción XXVII del citado precepto Constitucional, en tal virtud, son nulas dichas disposiciones que ordenen los lineamientos de tipo social establecidos en nuestra Carta Magna, de las normas de trabajo, se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en sus Artículos 2o. y 3o. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador (Artículo 18), interpretación que debe hacerse precisando su alcance y determinar su contenido social y atendiendo a los fines de nuestra Constitución Mexicana, que en materia de trabajo, previene que son netamente de tipo social, como se desprende nuestro Código Laboral, quien ordena que se cumpla con esa finalidad, pero en su Articulado posterior, (516 al 522) incluye la prescripción de los derechos obreros, así también en su precepto 773 admite la caducidad de sus derechos en perjuicio de esta clase mencionada - a lo que nos preguntamos: ¿Qué equilibrio y justifi-

cia social se logró con tales instituciones incorporadas a la Ley Federal del Trabajo?, nótese pues, la notoria contradicción a que hacemos alusión en párrafos anteriores, en contra de nuestro artículo 123 -- Constitucional y aún del mismo Código Laboral citado, como se logra así aplicar la justicia social de que habla el Artículo 2o. ya señalado, si se desequilibra en perjuicio de la clase trabajadora a' restringirse sus derechos fundamentales.

En cambio, los derechos de los patrones sí - deben estar sujetos a términos prescriptorios y consecuentemente, prescribir en su perjuicio si no los hace valer en los términos indicados por la Ley, también la caducidad debe pues, eliminarse en perjuicio de éstas dichas instituciones, por los siguientes motivos:

a).- No existe en nuestra Constitución precepto alguno que ordene tal restricción, por ésto, carece de fundamento legal su regulación.

b).- Al regularse en la Ley Federal del Trabajo, se está contraviniendo a los principios del Artículo 123 que fué creado en favor y para garantía de los obreros, así como al de principio de supremacía a que se refiere el Artículo 133 del mismo -- cuerpo de Leyes al enunciar: "Esta Constitución, - las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de -- élla y todos los tratados que estén de acuerdo con la

te de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado, se arreglarán a dicha Constitución, Leyes y Tratados; a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados".

c).- Porque la prescripción así regulada, además de los motivos anteriores, no obstante, que en su artículo inicial contempla desiguales a obrero y patrón, viene en el presente caso a tratar igual a uno como al otro, hecho que a todas luces carece de justificación legal, social, política y sobre todo económicamente, consecuentemente choca aún con su Artículo que la misma Ley Laboral contiene, lo que es más perjudicial todavía, que se aparte de los lineamientos de la Constitución Mexicana.

d).- Casi todos los casos de prescripción de derechos que previenen los Artículos del 516 al 522, son en perjuicio de los trabajadores, excepto el 517 Fracción I y 516, éste último en términos generales se refiere a la prescripción de los derechos de los patrones, lo que contraría tajantemente los propósitos sociales que persigue nuestra Constitución.

c).- En lugar de la prescripción de los derechos obreros. deben legislarse preceptos que hagan y eviten ésta, así como la comunicación e información del obrero de que a partir de tal ó - cual fecha o momento puede hacer valer sus derechos frente a situaciones que hayan motivado dicha actividad.

Incongruente resulta pues, en todos as pectos. el hecho de que se restrinjan los derechos obreros, perjudicando de ésa manera a la clase - débil y como se expresara el Constituyente Jara, - macilente, triste, pálida y agotada por el trabajo, y quienes carecen de iniciativa para leer un libro, de saber cuáles son sus derechos y cuáles - sus prerrogativas que tiene, si sale del trabajo perfectamente cansado y agobiado, rendido y comple tamente incapaz de hacer otra cosa más que tomar - un medio bocado y echarse sobre el suelo a descansar, y agrega: "¿Qué aliento puede tener para - leer un libro. cuando su estómago está vacío, cuando no están cubiertas sus más imperiosas necesida des. cuando la única preocupación que tiene es me dio contemplar el pan para el día siguiente?", no sotros podríamos agregar que otra de las preocupa-- ciones de éstas personas es conservar su único pa-- trimonio que es su empleo y su capacidad de labo-- rar, y no piensan más que en éso, se expresa Heri-- berto Jara. La Revolución de 1910 vino a otorgar

en su favor através de la Constitución Mexicana sus derechos que le garanticen una vida digna y humana, por éello, también agrega el Constituyente, en este caso el minero Zavala, que fueron obreros y los campesinos quienes hicieron las revoluciones, pues los generales ¿qué hubieran hecho frente al enemigo con todo y sus águilas que ostentan si no tenían soldados?, como lo fueron dichas personas.

Considerando que difícilmente desaparezca la regulación de la prescripción en nuestro Código Laboral, al menos estimamos que se concedan plazos diferentes para uno y otra parte, es decir, más amplio para los trabajadores, diez años, para que éstos hagan valer sus respectivos derechos, y en cuanto al plazo concedido a los patrones, que se reduzca a dos meses en todos los casos que en su contra previene la Ley Laboral, otra situación que también debe tomarse en cuenta para éste efecto, es la forma de computarse el término prescriptorio, ó sea, para cuando opere en perjuicio del obrero debe contarse incluyendo únicamente los días hábiles, en cambio, cuando sea el patrón quien deba -- ejercitar sus derechos en determinado plazo, debe computarse el plazo incluyendo también los días inhábiles como lo hace actualmente la Ley citada, en su artículo 522.

También debe obligarse al patrón a que co
munique por escrito al trabajador, ó avise por escrii
to a éste en el que se indique la fecha y causa ó --
causad de la rescisión laboral, así como en los casos
de terminación, despido o en cualquier otro hechos --
que motive la suspensión, modificación de las rela--
ciones de trabajo que los una; el Artículo 47 en su
parte final fué reformado, y lo único que se logró --
con éllo, fué devolver al obrero sus derechos que la
misma Ley le había arrebatado, regulando ya el primer
caso que indicamos. ó sea la rescisión, para que el
trabajador esté en mayores posibilidades de hacer va
ler sus respectivos derechos.

Ahora por lo que respecta a los efectos
y consecuencias que resultan cuando opera la prescripci
ción de los derechos obreros o patronales, son complete
mente diversas en uno y en otro; fatales para el --
obrero y mínimas para el patrón, pues como la finalidad
del derecho del trabajo es netamente social, nivel
ladora y protectora de los derechos de los trabajadores
res, garantizando cierto nivel de vida y económico en
su beneficio, de manera que si los principios jurídicos
no corresponden a la realidad y cuando por consigu
iente. conducen a un divorcio entre el derecho y --
la vida como se expresara el maestro Mario de la Cueva,
como resultado final se llega a la injusticia, de

jando de ser principios jurídicos, para transformarse en medios de opresión, como es el caso de haber incluido la prescripción de los derechos de la clase trabajadora, sin fundamento y base legal para éllo y sin medir las consecuencias graves que dicha institución trae en su perjuicio, pues también como señalara el - citado Maestro, la necesidad en nuestros obreros es - permanente, vital y lo acompaña durante toda su vida, por lo que en esas condiciones, es fácil deducir las consecuencias que trae la prescripción de sus dere--chos sociales é individuales.

Otro aspecto que también es muy importante mencionar en el curso de éste trabajo, considerando los grandes efectos que también produce en perjuicio de nuestra clase trabajadora, es la corrupción que prevalece en nuestros Tribunales Laborales, lo que ha -- traído como resultado que cuando éstos acuden a ejercer sus derechos ante los citados Tribunales se to--pen con doble enemigo, el patrón demandado y el personal que labora en la Junta Especial que conozca en su caso del conflicto, en muchas ocasiones también podemos observar la parcialidad con que funcionan dichos Tribunales en favor de la clase patronal, al grádo de que dictan laudos contrarios a los intereses del trabajador, aún sin existir base legal para resolver de esa manera; quedan Tribunales Federales para que éstos atiendan conforme a derecho de sus peticiones y se -

dicte la resolución a su favor que debió emitir el Tribunal Laboral. En muchos casos, todas éstas irregularidades hacen que el trabajador se olvide de su demanda y termine por archivarse el expediente, gracias también; a la caducidad que nuestro Código Laboral previene en su perjuicio, y como consecuencia de la lentitud con que se imparte justicia en los ya referidos Tribunales Laborales.

c).- FUNCIONAMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN.

La prescripción es una excepción de carácter perentorio, es decir, extingue la pretención cuando es declarada procedente, así lo señala el maestro Alberto Trueba Urbina (11) excepción que siempre será opuesta por la parte demandada en los juicios laborales, que pueden ser los patrones y también en algunos casos los trabajadores, así en el caso previsto en el artículo - 518 de la Nueva Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen un plazo de dos meses para ejercitar sus de rechos en contra de él o los patrones, cuando aquéllos sean separados de su trabajo, de tal manera que si no hacen valer sus derechos dentro del mencionado plazo, el patrón opone la excepción de prescripción; en el ca so si ésta es declarada procedente por ajustarse a de recho, librándose así de las obligaciones de indemnizar a los obreros en caso contrario; ésto es, cuando los trabajadores son quienes oponen dicha excepción, por -

haber transcurrido el término de un mes que concede el artículo 517 Fracción I, a los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios, de manera pues, - que por no haber ejercitado sus derechos en las condiciones establecidas, los trabajadores quedan liberados de la obligación de pagar la deuda ó de separarse del trabajo. La excepción de prescripción solo puede ser estudiada por el Tribunal cuando se alegue por la parte a quién beneficie, ésto es, que no opera de oficio, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias jurisprudenciales, ya - que la nueva Ley Federal del Trabajo nada dice al respecto, hubo necesidad pues, de que se aclarara tal situación por dicho Tribunal haciéndolo en los siguientes términos: Prescripción, la Junta carece de facultades para declarar de oficio que ha operado la prescripción, sin haber el demandado opuesto la excepción respectiva, ya que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 842 del Código Laboral, su laudo debe ser congruente - con la demanda y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el negocio, y debe decidir sobre los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, lo que significa a contrario sensu, que no debe ocuparse cuestiones ajenas a la litis. Amparo Directo 1663/1964, Julio 20 de 1956. Alejandro Jaimes, 4a. Sala, Sexta

época, Volúmen XCVII, Quinta parte, página 46.

La Junta debe suplir las deficiencias cuando se afecten los derechos ó intereses de los trabajadores y - sean éstos quienes opongan la citada excepción, por ejemplo, cuando ha transcurrido el término para que el patrón despida a un trabajador; en cambio, cuando sea el patrón quien corresponda oponer la mencionada excepción, la Junta no debe suplir la deficiencia en su beneficio y consecuentemente en perjuicio de los obreros.

Otra tesis también sustentada por nuestro máximo Tribunal y en la que al igual debe aplicarse la situación prevista en el comentario que antecede.

d).- ACCION Y EXCEPCION, SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y LOS HECHOS INVOCADOS.

En relación con la acción ejercitada, al Actor sólo le corresponde probar los hechos que aduce como fundamento de la misma y, si entre éstos invoca la existencia de un contrato colectivo de trabajo, la prueba al respecto consiste en la exhibición del contrato invocado. Si - el demandado niega vigencia a tal concepto (excepción) - alegando que fué derogado ó abrogado por otro posterior, es a éste a quién incumbe la exhibición del contrato posterior, y de no hacerlo, la responsabilidad ha de tener - por vigente el exhibido por el Actor, sin que pueda aducirse que la vigencia de éste último contrato, era el elemento constitutivo de la acción, pues por el contrario, la -

existencia de otro contrato posterior, es el elemento constitutivo de la excepción opuesta. Amparo Directo 489/1955. Ferrocarriles Nacionales de México, Marzo 22 de 1957, 4a. Sala, Boletín 1957, Página 213. (12)

Debe probar el demandado el inicio del plazo prescriptorio en la acción correspondiente, como se desprende de la siguiente tesis jurisprudencial sustentada por la Suprema Corte de Justicia. Corresponde al demandado que opone ésa excepción probar la fecha a partir de la cual comenzó a correr el término respectivo por haber tenido conocimiento el Actor desde entonces de que podía ejercitar la acción correspondiente, y no a dicho Actor acreditar desde cuando conoció el hecho que motivó que se conociera el cómputo del tiempo. Amparo Directo 782/1956. David Palacios. 4a. Sala Boletín 1957. Página 281. (13)

Como puede verse, además de que la Junta Local de Conciliación carece de facultades para declarar de oficio que ha operado la prescripción, también es obligatorio de que quien opone dicha excepción; corresponde probar el momento de inicio de la prestación y de que el Actor tuvo conocimiento de tal situación para alegar sus derechos correspondientes, a éstos últimos elementos la Suprema Corte de Justicia los denomina extremos de la prescripción fundamentales y que necesariamente se deben probar, como se desprende

de de la tésis jurisprudencial que a continuación se menciona: Prescripción. Para la operancia de la prescripción, no es necesario señalar pormenorizadamente las circunstancias en las que se funda, pues tratándose de un fenómeno jurídico que actúa por disposición de la Ley, y mediante el transcurso del tiempo cuando se plantea en la contestación de la demanda respecto a los derechos ejercitados, - se viene en conocimiento de la calidad y categoría de la defensa puesta por el demandado y lo único que queda por demostrar son los extremos que determinan el cómputo del término prescriptivo. Cuando se plantea la excepción y - en la secuela procesal se rinde prueba tendiente a comprobar un hecho interrumpido de la prescripción, la Junta está obligada a estudiar tales pruebas y decidir si efectivamente surte la interrupción alegada. Amparo Directo --- 6170/1955. Alberto Almeida López. 4a. Sala. Boletín -- 1956. Página 817. (14)

En materia laboral, no opera la prescripción adquisitiva, únicamente la extintiva, ya de derecho ú obligaciones según el caso, así vemos en la tésis jurisprudencial que en seguida se indica: Prescripción adquisitiva, en materia laboral para adquirir puestos en propiedad. No existiendo en materia laboral la figura Jurídica de la - prescripción adquisitiva. es indudable que el trabajador que suplió a un compañero suyo ascendido temporalmente a un determinado puesto, no puede estimarse como definitivo en dicho puesto que ha venido ocupando, aún cuando

haya permanecido en él, por un período superior a un año, pues la circunstancia aludida no le ha otorgado en ningún momento la facultad de adquirir en propiedad la plaza en cuya suplencia ha venido actuando. Así es que, el haber tenido el Actor que abandonar a su vez el empleo que pretende, éllo no implica ninguna violación de derechos, y - al estimarlo así la Junta de Conciliación y Arbitraje, tam poco ha violado en perjuicio del trabajador las Garantías Constitucionales. Amparo Directo 5843/1969. Antonio Sánchez. Julio 13 de 1970. 4a. Sala. Informe 1970. Página - 34. (14)

Respecto al momento procesal en el cual debe - oponerse la excepción de prescripción, es precisamente en la audiencia de lo ordenado por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el precepto legal 878 fracciones III y IV del aludido Código Laboral, así lo ha confirmado también la Suprema Corte de Justicia, al señalar en la siguiente tésis jurisprudencial. Exposición Extemporánea. Para que la Junta pueda proceder a examinar las excepciones, éstas deben ser opuestas en la Audiencia de Demanda y Excepciones por ser en ella en que se fija la lítis. Ejecutoria. Informe 1973. 2a. Parte. 4a. Sala. Página 43. Amparo Directo 2618/1972. Arturo Pérez Barrios. (15)

En cuanto a la forma de computar los primeros y los últimos días del plazo que la Ley concede a los

trabajadores y patrones para que hagan valer sus derechos, y no lo hacen, opera la prescripción cuando se alega por - la parte demandada, la Suprema Corte de Justicia en la siguiente tésis y de acuerdo a lo estipulado por el artículo 522 de la Ley Federal del Trabajo; al señalar Prescripción en Materia Laboral. Si en una reclamación de prescripción en contra de una de las acciones a que se refiere la Fracción XXII del artículo 123 Constitucional, se tiene por - cierto que el despido ocurrió en un día conocido, debe entenderse que el término prescriptivo de un mes (ahora dos meses) comienza a correr, en el caso más favorable para el Actor, el día siguiente del despido, aunque éste sea feriado, porque la Ley sólo toma en cuenta para excluir del cómputo por ser día feriado el último término, más no el primero. Amparo Directo. 905/1956. Socorro Saucedo N., 16 de Noviembre de 1956. 4a. Sala. Boletín 1956. Página 817.

En el caso de que los demandados sean varios, basta que uno de ellos interponga la excepción de prescripción, - para que de ser legalmente fundada beneficie a todos, así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar: Prescripción. Excepción opuesta singularmente en caso de pluralidad de demandados. Basta que la excepción de prescripción haya sido opuesta por uno solo de - los demandados, para que de ser estimada operante, beneficie a todos aquéllos contra los que se enderezó la acción considerada prescrita, ya que siendo la consecuencia de - la prescripción dejar sin efecto la acción, tal efecto -

favorece necesariamente a todos los demandados. Amparo Directo 1273/1970. Tito Rodriguez. 2 de Julio de 1970. 4a. Sala. Informe 1970, Página 35.

La tesis que antecede, viene a cumplir en una mínima parte con los lineamientos sociales de nuestro - Artículo 123 Constitucional, restringiéndose aún en gran parte los derechos obreros con la regulación de la prescripción.

En cuanto al momento a partir del cual debe contarse el plazo prescriptorio cuando los obreros comen una falta, la Suprema Corte de Justicia ha emitido la siguiente tesis jurisprudencia. Prescripción. Fecha en que empieza a computarse el término respecta a las acciones derivadas de faltas de trabajadores. El hecho de que la Empresa tenga conocimiento de una falta atribuida a un trabajador, no significa que desde ese momento empiece a correr el término para la prescripción, sino que éste contará a partir de la fecha en que se tenga la certeza de que la falta fué realmente cometida, después de practicarse la investigación correspondiente. Amparo Directo 3455/1967. Elena Alejandri G., 16 de Octubre de 1968. 4a. Sala. Sexta época. Volúmen CXXXVI, Cuarta parte, Página 37.

CITAS BIBLIOGRAFICAS:

- 1.- Trueba Urbana Alberto, El Nuevo Derecho Procesal del trabajo, Editorial Porrúa, S.A., páginas 218 y 219.
- 2.- De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Roma S.A., pags. 777 y 778.
- 3.- Guerrero Euquerio, Manual de Derecho del Trabajo, -- Ediciones Roma, pag. 259.
- 4.- Obra citada, Guerrero Euquerio, Manual de Derecho -- del Trabajo, pags. 259 a 263.
- 5.- Obra citada, Guerrero Euquerio, pag. 575.
- 6.- Obra citada, De la Cueva Mario, pag. 594.
- 7.- Obra citada, Cavazos Flores Baltazar, pag. 561.
- 8.- Muñoz Luis, comentarios a la Ley Federal del Trabajo, pag. 551.
- 9.- Obra citada De La Cueva Mario, pag. 186.
- 10.-Obra citada, Trueba Urbana Alberto, pag. 218 y 219.
- 11.-Jurisprudencia y Tesis sobresalientes de 1966 a 1970. Actualización II, Editorial Mayo, pag. 48.
- 12.-Jurisprudencia Tesis de 1955 a 1963, pag. 234.
- 13.-Ibidem.
- 14.-Ibidem.
- 15.-Ibidem.

CAPITULO TERCERO.

**LAS DIVERSAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES
EN MATERIA LABORAL.**

- a).- Los Artículos 40., 50., 107, 123 y 133 Constitucionales.
- b).- Tesis de la Suprema Corte de Justicia admitiendo la Constitucionalidad de la Prescripción.
- c).- Otras Tesis similares sustentadas por dicho Tribunal.

LAS DIVERSAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA LABORAL.

a).- LOS ARTICULOS 4o., 5o., 107, 123 y -
133 CONSTITUCIONALES.

Nuestros Constituyentes de 1917, concientes de la desigualdad existente entre los obreros y los patrones, incluyó en nuestro máximo Código Federal, diversos Artículos que vienen a proteger al obrero, garantizándole una vida digna, tanto social como política y sobre todo económicamente, protegiendo su integridad física y tratando con éllo de nivelar y equilibrar las relaciones entre ambos y consecuentemente lograr la justicia social; todo éllo ha quedado debidamente plasmado en Nuestra Carta Magna como se desprende de los preceptos señalados a continuación.

El Artículo 4o. Constitucional, ordena: "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio ó trabajo que le acomode, - siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero ó por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la Ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede - ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial".

Dicho precepto Constitucional, constituye una garantía para los obreros mexicanos al concederle la libertad de trabajo, como también lo previene el si guiente Artículo que se enuncia.

Artículo 5o. Constitucional.- "Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno conocimiento, salvo - el trabajo impuesto como pena por la Autoridad Judi--- cial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las Fraccio nes I y II del Artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y de los jura-- dos, así como el desempeño de los cargos consejiles y los de elección popular, directa ó indirecta. Las fun-- ciones electorales y censales tendrán carácter obliga-- torio y gratuito. Los servicios profesionales de índole social, serán obligatorios y retribuidos en los tér-- minos de la Ley con las excepciones que ésta señale.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto ó convenio que tenga - por objeto el menoscabo, la pérdida ó el irrevocable - sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por cau-- sa de trabajo, de educación o de voto religioso. La Ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de

órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretenden erigirse.

Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su prescripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

El Contrato de Trabajo, sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la Ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida ó menoscabo de cualquiera de los derechos políticos ó civiles.

La falta de cumplimiento de dicho Contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

Tanto el Artículo 4o. como el 5o. Constitucionales, se refieren a la libertad de trabajo. El hombre sobrevive y progresa mediante su propio trabajo. Garantía para que pueda libremente elegir su medio de sustento o la actividad que le acomode, siendo lícitos ó sea, no prohibidos por la Ley, y evitar que sea, salvo por sentencia judicial, privado del producto de su

trabajo, constituyen los propósitos fundamentales del Artículo 4o. La libertad de trabajo puede ser limitada por sentencia judicial ó resolución gubernativa. En este segundo caso, debe basarse la mencionada resolución en una Ley, que a su vez determine cuando -- cierta labor ofende los derechos de la sociedad.

Complementariamente, el Artículo 5o., establece una serie de prohibiciones a fin de evitar que el hombre sea obligado a prestar determinado trabajo sin su consentimiento, o deje de percibir una justa com-- pensación por sus servicios, pierda la libertad, vaya al destierro, renuncie a ejercer una determinada profesión, industria o comercio, o se le prive del pleno goce de sus derechos civiles o políticos, aún cuando para todo, se contara con la voluntad del interesado la que no surtirá efecto legal alguno, debido a la -- protección absoluta que a esos derechos otorga la - Ley Suprema.

Las garantías individuales establecidas por la Constitución, además de su fin propio: Proteger - al hombre y en materia laboral al obrero, tiene otro, que es el de salvaguardar a la colectividad. La libertad propia está limitada por la libertad de los de más, de ahí que no pueda ser absoluta y máxime tratán dose de la regulación de las relaciones laborales - entre Capital y Trabajo en que urge proteger al obre- ro del primero de los citados y obligando a los patro

nes, además; a que respeten sus derechos previstos en su favor, esta es la razón de las limitaciones a los derechos que consagran estos Artículos.

La Materia que trata el Artículo 5o., es de tal importancia que, al discutirse su texto por el -- Constituyente de 1917, se desprendió de él, como título especial y autónomo el Artículo 123, uno de los máximos logros de la Revolución Mexicana.

En Materia de Amparo, eficaz sistema protector de las libertades individuales y de la supremacía de nuestra Constitución Mexicana, y con el único fin de proteger a la clase obrera mexicana, consagró la excepción al principio de estricto derecho (los Tribunales competentes sólo se deben atener a los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo por el quejoso sin poder suplir de oficio ni los actos reclamados, ni los conceptos de violación, sin embargo, en materia laboral, se previno la suplencia de la dificiencia de la queja, como se desprende del Artículo Constitucional que en seguida se comenta.

Artículo 107 Constitucional.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103, se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la Ley de acuerdo con las siguientes bases:

I.- El Juicio de Amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada.

II.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la Ley o acto que la motivare.

Podrá suplirse la deficiencia de la queja, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

También podrá suplirse la deficiencia de la queja en materia penal y la de la parte obrera en materia de trabajo cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la Ley que lo ha dejado sin defensa.

Suplencia de la deficiencia de la queja que consiste en que los Tribunales competentes tienen la obligación de reemplazar de manera oficiosa las improvisaciones ó carencias en que haya incurrido el obrero en su demanda de Amparo, para mayor defensa y garantía de sus derechos, suplencia que con toda justificación está regulada, dada la naturaleza y situación de nuestro trabajador. En cambio tratándose de los patrones

no opera dicha suplencia, dada su desigualdad que guarda frente al trabajador.

Por su parte, el Artículo 123 Constitucional viene a consignar en favor de la clase trabajadora, los derechos esenciales para la regulación de las relaciones laborales con los patrones y un esfuerzo para establecer la igualdad económica entre Capital y Trabajo, constituyendo así en su favor, garantías minimasen dichas relaciones, pues le protege su salud y vida, jornada máxima y salario mínimo, éstas y otras condiciones no podrán en ningún momento ser modificadas - en perjuicio del trabajador, ni siquiera con la voluntad de éste, porque entonces no se lograría cumplir - con tales principios consignados en dicho precepto.

La Fracción I, fija la Jornada máxima de trabajo, con tal medida se trata de evitar una explotación inhumana, aún cuando para ese fin concurriera la voluntad del propio trabajador. En la Fracción II se prevee el caso del trabajo nocturno, y para él se establece la Jornada máxima de siete horas, en razón de que resulta un trabajo más agotador que el diurno.

Las Fracciones II, III y IV, consagran - principios protectores para la mujer y los menores de dieciseis años. A la mujer y a los menores, se les -

prohíbe dedicarse a determinadas labores insalubres y peligrosas para su salud. La Ley estima que el niño menor de catorce años, no debe efectuar trabajos remunerados, ya que en esta época de desarrollo físico y mental; la sociedad está obligada a proteger su crecimiento y educación. Trato especial se otorga a la mujer antes y después del parto en bien suyo y de su hijo.

La Fracción IV, fija por cada seis días la labor, uno de descanso para el obrero.

Las Fracciones VI, VII, VIII, X y XI, se refieren a los principios que rigen el salario. La Ley además de proteger la integridad física y espiritual del trabajador, quiere asegurarle que su tarea recibirá un pago justo y equitativo, suficiente para que tenga una vida decorosa. De ahí que se fije un salario mínimo y se garantice su entrega. El salario mínimo se estima que es la menor cantidad de dinero que puede recibir un hombre, para satisfacer sus necesidades esenciales y la de su familia. El salario comprende, además del pago convenido, todas las ventajas económicas establecidas en el contrato.

La Fracción IX, se refiere a la participación del trabajador en las utilidades de la Empresa, pues como con su esfuerzo se aumenta el capital, justo es

que participe en la proporción que la Ley establece de las ganancias que el patrón obtenga.

Las Fracciones XII y XIII, muestran el propósito del legislador de proteger a los trabajadores en diversos aspectos fundamentales de la vida: el hogar, la educación de sus hijos, la salud, etc..

El único patrimonio del obrero, es su capacidad de laborar. Por eso, cuando a consecuencia del trabajo sufre un riesgo, enfermedad o accidente, la Ley responsabiliza al patrón y le impone obligaciones respecto de quien ve disminuída o suprimida su posibilidad de trabajar. Además, el patrón no só lo debe compensar el daño sufrido, sino también evitarlo con medidas preventivas (Fracciones XIV y XV.

La Fracción XVI, reconoce el derecho de trabajadores y patronos para asociarse en defensa de sus respectivos intereses. La Asociación Sindical es una de las principales garantías sociales de los trabajadores y se basa en el principio de que la Unión hace la fuerza; con éllo quiere alcanzar un equilibrio entre dos factores: Capital y Trabajo.

Las Fracciones XVII, XVIII y XIX, reconocen a los trabajadores el derecho de huelga, y a los pa

trones el paro. Estos, sin embargo, no pueden ser absolutos; la Ley los reglamenta y sólo los reconoce con las condiciones que élla establece.

Las Fracciones XX, XXI y XXXI, se refieren a las Autoridades establecidas para dirimir los conflictos que surjan entre capital y trabajo, obreros y patronos.

El patrón que despid a un trabajador sin causa justificada, estará obligada, según prefiera éste, a reinstalarlo o a indemnizarlo (Fracción XII).

La Fracción XXVII, establece: Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes,

a).- Las que estipulen una Jornada inhumana, por los notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo.

b).- Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

c).- Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal.

d).- Las que señalen un lugar de recreo,

fonda, café, taberna, cantina ó tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos.

e).- Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los Artículos de consumo en tiendas o lugares determinados.

f).- Las que permitan retener el salario en concepto de multa.

g).- Las que constituyan renuncia, hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato, o por despedirse de la obra.

h).- Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las Leyes de protección y auxilio a los trabajadores.

Por Ley publicada el 19 de Enero de 1943, se reglamentó en México la Fracción XXIX del citado Artículo, creándose el Instituto Mexicano del Seguro Social. La Seguridad Social tiene como finalidad proteger al hombre trabajador y a su familia contra

la enfermedad, la muerte y la miseria, así como capa citar lo en, o para su trabajo. Es uno de los logros obtenidos en favor de nuestros obreros mexicanos, -- asalariados y no asalariados, a quienes asegura contra esos perjuicios con atención médica; jubilaciones; pago de pensiones en caso de incapacidad, desempleo ó muerte; capacitación profesional y otras -- prestaciones sociales.

El Apartado "B" contiene una reglamentación homogénea a la que contiene el Apartado "A", solo variable en algunos aspectos a la establecida para el trabajador en general, y rige para el servidor público, por ejemplo, la seguridad de éstos trabajadores está a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para resolver sus controversias entre el empleado público y el Estado, existe el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Refiriéndonos brevemente a los antecedentes del Artículo 123 Constitucional, nos encontramos con la Asamblea de los Constituyentes Froylán C. Manjarrez, el Diputado por Yucatán Héctor Victoria, que con un numeroso grupo del Congreso pedían se consignaran en el Artículo 5o. las garantías -- esenciales para la futura legislación obrera, pro-

nunció un memorable discurso donde se encuentran — las principales ideas que después se establecerían en el artículo que venimos comentando, que concluye con estas palabras: "Cuando hace días en esta Tribuna, un Diputado Obrero, un Diputado que se distingue de algunos muchos porque no ha venido disfrazado como tal, con una credencial obrera, cuando ese compañero, cuando ese camarada aquí, con un lenguaje burdo, tal vez en el concepto del Congreso, pero con la sinceridad que se nota en los hombres honrados; cuando ese camarada digno por muchos conceptos, dijo que en el proyecto de reformas constitucionales, el problema del trabajo no se había tocado más que superficialmente, dijo entonces una gran verdad, y desde luego le tendí mi mano fraternalmente, quedando enteramente de acuerdo con él. Ahora bien, es verdaderamente sensible que al traerse a discusión un proyecto de reformas que se dice Revolucionario, deje pasar por alto las libertades públicas, como han pasado hasta ahora las estrellas sobre la cabeza de los proletarios; ¡allá a lo lejos!

Heriberto Jara terció en el debate, manifestando su inconformidad con los juristas que en la Asamblea afirmaban una postura liberal clásica, y por tanto contraria la pretensión de los Diputados que, interpretando la realidad mexicana y las aspiraciones de los obreros, deseaban que en el texto constitucional quedaran asentadas las garantías otorgadas a los trabajadores. Contra ellos dijo. "Los jurisconsul-

tos, los tratadistas, las eminencias en general en ma
teria de Legislación, probablemente encuentran hasta
ridícula esta proposición, ¿cómo va a consignarse en
una constitución la Jornada máxima de trabajo? ¿cómo
se va a señalar allí que el individuo no debe trabajar
más de ocho horas al día?, eso según ellos, es impo-
sible: eso, según ellos pertenece a la reglamentación
de las Leyes: pero, precisamente señores, esa tenden-
cia, esa teoría, ¿qué es lo que ha hecho? que nuestra
Constitución tan libérrima, tan amplia, tan buena, ha
ya resultado como la llamaban los señores científicos,
un traje de luces para el pueblo mexicano porque faltó
esa reglamentación, porque jamás se hizo. (1)

Sobre las demás leyes, es sostener la vi-
da misma del pueblo, pues es la base de nuestra Organi
zación Política, Jurídica, Económica y Social, por lo
que todas las leyes y actos que dicten las autoridades
deben estar en consonancia con ella.

Todas las disposiciones, leyes federales,
tratados, constituciones y leyes locales, en su expedi
ción y aplicación deben ajustarse a esa norma fundamen-
tal, es decir, deben ser constitucionales. O sea para
que nazca y viva cualquier Ley (Federal o Local) y así
cualquier disposición o acuerdo administrativo tenga -
plena validez; para que los actos y resoluciones judi
ciales sean legales tienen antes y sobre todo, que -

encontrar su fundamento en la Constitución Política.

Este último precepto Constitucional lo mencionamos en virtud de que se trata y previene el principio de supremacía a la que deben necesariamente sujetarse todas las demás leyes tanto federales como locales, sin contravenir los principios ya establecidos y en consecuencia deben también estar fundamentadas en la misma, situación que no fué respetada por nuestros Legisladores al incluir en la Ley Federal del Trabajo, la regulación de la prescripción de los derechos obreros, pues además de incongruente con la misma Ley laboral citada, lo es sobre todo con los principios tuteladores, proteccionistas y niveladores.

El Diputado Alfonso Cravioto señaló: "Insinúo la conveniencia de que la comisión retire, si la Asamblea lo aprueba, del artículo 5o. todas las cuestiones obreras, para que, con toda amplitud y con toda tranquilidad, presentamos un artículo especial que sería el más hermoso de todos nuestros trabajos aquí; pues así como Francia, después de su Revolución ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus Cartas Magnas los inmortales derechos del hombre, así la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una Constitución los sagrados derechos de los obreros". (2)

Refiriéndonos a la supremacía de nuestra Constitución Mexicana, en los términos del precepto 133 que previene: "Esta Constitución, las le yes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán - la Ley Suprema de toda la Unión. Los Juces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución y Leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes - de los Estados".

Mantener tal supremacía de nuestra Cons titución Mexicana que consagra nuestra Carta Magna, carece pues, de toda fundamentación sobre dicho Có digo, así como de toda justificación política, so-- cial y económicamente, consecuentemente se contravie ne a tales principios y se restringen los derechos de la clase obrera mexicana en su perjuicio, los - Legisladores que al emitir su dictámen sobre el pro yecto de la Ley Federal del Trabajo, refiriéndose a la institución de la prescripción argumentaron lo - siguiente:

"Las normas sobre la prescripción su-- frieron algunas modificaciones, que consideraron - justas para evitar la pérdida de las acciones por - la brevedad de los plazos señalados en la Legisla--

ción vigente; el Artículo 318 aumentó a dos meses el término de la prescripción en los casos de separación del trabajo. Se propone la modificación en forma y fondo de los Artículos 517 y 518, para aclarar conceptos y precisar modalidades prescriptorias.... se consideró suficiente el tiempo de un mes para los dos primeros supuestos (517 Fracciones I y II) y se incrementó hasta dos meses el ejercicio de las acciones de los trabajadores, en virtud de que se ha observado con frecuencia que el trabajador debe satisfacer ciertos requisitos para poder plantear su reclamación...."

Como puede observarse, la argumentación de nuestros Legisladores en relación con la prescripción de los derechos obreros, simplemente no se analizó que su regulación es contraria al principio de el Artículo 123 Constitucional, carece de fundamento para éllo, tampoco tomaron en cuenta que el derecho del trabajo es imperativo y nivelador en las relaciones laborales entre el capital y el trabajo y no obstante - ésto, concedieron término igual para uno y otro, a pesar de la desigualdad existente entre ambos, y lo que es más, no meditaron sobre los efectos que causa la referida prescripción en unos y en otros que es tan diversa y grave para la clase trabajadora, en todo éllo se pasó por alto, ya que simplemente dichos legisladores señalaron, "que se ha observado con frecuencia - que el trabajador debe satisfacer ciertos requisitos para poder plantear su reclamación".

Nuestra Suprema Corte de Justicia, refiriéndose a la prescripción de los derechos obreros, - únicamente en la tésis que se señala a continuación, hizo una interpretación fiel de los principios a que se refiere el Artículo 123 Constitucional.

b).- TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ADMITIENDO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN.

Hasta el año de 1935, en la Corte se mantuvo el principio derivado del Código Civil. Como era natural se planteó el problema de la prescripción, ante la Cuarta Sala y después de una acalorada discusión, se confirmó la tésis en la ejecutoria del 4 de Abril de 1935, Toca 6257/34/2a/- Juan Silva, por mayoría - de tres votos. El argumento consistió en que, conforme al artículo 1161 de la Ley Civil, la Legislación - común debía aplicarse supletoriamente para interpretar las disposiciones vagas ó imprecisas, caso en el que se encontraba el artículo 328 de la Ley del Trabajo que nada decía sobre el inicio de la prescripción; se agregó en la ejecutoria que sea supletoriedad era tanto más justificada, en cuanto que el derecho común contenía una regla general favorable a los trabajadores.

El Artículo 1161 del Código Civil de 1884 estipulaba: "La prescripción comienza a correr desde la fecha en que dejaron de prestarse los servicios".

Por su parte, el artículo 328 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 señalaba: "Prescribirán en un año las acciones nacidas del contrato o de la Ley".

Respecto de el artículo 7o. transitorio, - ordenaba: "El plano para computar el término de la prescripción, corre a partir de la fecha en que entró en - vigor la Ley".

En seguida, nos permitimos transcribir el considerando Unico contenido en la ejecutoria del 4 de Abril de 1935 antes señalada, en los siguientes términos:

"CONSIDERANDO UNICO.- El recurrente hace valer como agravio en contra de la sentencia del inferior, el que éste desestimó el concepto de violación - hecho valer en la demanda, en el sentido de que la Autoridad señalada como responsable hizo una inexácta - aplicación del artículo 328 de la Ley Federal del Trabajo, al contar el plazo señalado en dicho precepto, - desde el momento en que empezaron a ser exigibles los derechos del trabajador para reclamar las diferencias de salarios y no desde la fecha en que el propio trabajador dejó de prestar servicios y no desde la fecha en que el propio trabajador dejó de prestar servicios de mayor remuneración. El agravio debe considerarse fundado, pues aún cuando es cierto que en el artículo -- 328 de la Ley Federal del Trabajo, no se establece en

qué forma debe computarse, en casos como el presente, el término de la prescripción, el citado precepto ha de interpretarse de acuerdo con el espíritu de la Legislación del trabajo, de donde se infiere que si dicha legislación es únicamente protectora de los intereses de la clase obrera, aquel artículo deberá interpretarse de la manera más favorable al trabajador, es decir, considerando que el término de la prescripción, empezó a correr desde el momento en que el obrero dejó de prestar servicios de mayor remuneración y no desde el momento en que fué exigible el derecho del mismo obrero para reclamar la diferencia de salarios. Esta tesis es la que se haya más en consonancia con el espíritu de la Legislación Obrera, y además, concuerda con la jurisprudencia establecida en este respecto por la Suprema Corte de Justicia y con la regla que en materia de prestación de servicios establece el Artículo 1161 del Código Civil, precepto que en su parte relativa dice: "que la prescripción comienza a correr desde la fecha en que dejaron de prestarse los servicios". Siendo fundado el agravio alegado por el recurrente. Debe revocarse la sentencia del inferior y concederse al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la Autoridad señalada como responsable, dicte nuevo laudo en el que calcule el importe de las cantidades adeudadas al señor Juan Silva, por diferencias de salarios, -- aplicado al caso, el tantas veces citado Artículo 328, de acuerdo con la interpretación que en este Conside-

rando se hace".

En la tésis comentada, vemos como nuestro máximo Tribunal ya está admitiendo la prescripción de los derechos obreros y consecuentemente su regulación, únicamente en cuanto al inicio del plazo prescriptorio, se argumentó que éste empezó a correr desde el momento en que el obrero dejó de prestar los servicios de mayor remuneración y no desde el momento en que fué exigible el derecho del mismo obrero para reclamar la diferencia de salarios.

La renuncia de los derechos de los trabajadores está prohibida por el Artículo 123 Fracción - XXVII de la Constitución, pero no obstante esto, y que atendiendo a la interpretación de nuestro máximo Tribunal hizo en la tésis comentada en párrafos anteriores en la que entre otras cosas se dice que dicha tésis se haya más en consonancia con el espíritu de la Legislación Obrera, en el transcurso de cinco meses aproximadamente la Suprema Corte de Justicia, además de admitir el efecto de la prescripción, sostuvo su Constitucionalidad, en la ejecutoria del 24 de Septiembre de 1935, Toca 464/35/3a.- Enrique Aguijosa, como puede observarse a continuación:

"Por lo que se refiere a la inconstitucionalidad que el mismo quejoso atribuye al Artículo 328 de la citada Ley del Trabajo, procede declarar desde -

luego que tal inconstitucionalidad no existe, puesto que se ha considerado siempre dentro de una apreciación jurídica exácta, que la prescripción es una institución de orden público, que debe reglamentarse en todas las leyes que fijen el procedimiento para la tramitación de los juicios, precisamente para dar seguridad y firmeza a todas áquellas situaciones jurídicas que, de no estar definidas, darían origen a numerosas y constantes discusiones, que se traducirían en incertidumbre y vacilaciones, aún para la aplicación de la Ley misma!

No compartimos la idea de nuestro máximo Tribunal en el sentido de que la prescripción es una institución de orden público, que además debe reglamentarse porque significa dar seguridad y firmeza a todas las situaciones jurídicas que en los casos previstos se presenten, pues carece de una completa justificación dicho argumento, en tal virtud y para seguir los lineamientos del citado Artículo 123, debió señalar que dicha institución no tiene cabida en un derecho social, proteccionista y nivelador, como lo es el derecho del trabajo y que consecuentemente se debe eliminar la prescripción de los derechos de la clase trabajadora, no así cuando se trata de los patrones, por lo que sólo de esa manera se cumple -- con los principios de nuestra Carta Magna. Al admitirse la constitucionalidad de la citada prescripción, nuestro máximo Tribunal a través de los señores Mi-

nistros integrantes de la Sala Laboral, rompieron -- completamente y se sumaron a la incongruencia con - que ha venido funcionando dicha institución aludida en la Ley Federal del Trabajo, como también sucede - con la caducidad que la misma regula, que tanto daño causan a nuestra Clase Obrera, pues vienen arrastrando con esa restricción de sus derechos otorgados y - concedidos por nuestro máximo Código.

c).- OTRAS TESIS SIMILARES SUSTENTADAS
POR DICHO TRIBUNAL.

La Suprema Corte de Justicia, siguiendo los lineamientos contenidos en el Articulado relativo a la prescripción que contiene nuestro Código Laboral, en el que se trata igual a poseídos y desposeídos como lo estipula en la tesis que seguida se enuncia:

PRESCRIPCION, SU NATURALEZA.- La prescripción es de orden público y sus efectos forzosa y necesariamente, tienen que ser iguales para una ú otra - partes contendientes, sin que su estimación pueda quedar al arbitrio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, puesto que se trata de una institución jurídica, que tiene por objeto consolidar las situaciones - de hecho, poniendo fin a las contiendas entre partes, cuando una de ellas abandona el ejercicio de sus derechos dejando transcurrir el plazo que la Ley señala - para ese efecto. Tomo I.- Celerayan Boguier Merced-- des.- Suc. de.- - página 280.

Dicho Tribunal en todo caso, señala que

cuando el término prescriptorio transcurra en perjuicio del obrero, la Junta debe intervenir para evitar que sus derechos se extingan, supliendo las omisiones que éste haya incurrido, en cambio, cuando sea en su favor y en perjuicio del patrón no debe haber tal suplencia.

En la ejecutoria de fecha 4 de Abril de 1935, toca 6257/34/2a. Juan Silva, mediante la cual la Suprema Corte de Justicia condenó a pagar salarios de casi cuarenta años, a partir de 1889, señalando que el término prescriptivo empezó a correr desde el momento en que el obrero dejó de prestar sus servicios, y no desde el momento en que fue exigible el derecho del mismo; dicha tesis fue rectificadora por la Corte, argumentando que ésta perjudica a la estabilidad de las industrias, que nunca saben cual pueden ser su verdadera situación y que el perjuicio lo siente no sólo la empresa, sino la sociedad en general y aún los mismos trabajadores, de tal manera que la ejecutoria del 4 de Abril de 1935, Toca 6257/34/2a. Juan Silva, misma que según argumenta la Corte, produjo un malestar empresarial y la insistencia de las Juntas, se hizo que se rectificara ese criterio, en la ejecutoria de fecha 12 de Febrero de 1936, Toca 6660/36/2a., Tomasa Godínez y coagraviados, y que en seguida se transcribe.

"Se refiere al segundo de los agraviados

a la forma de computar la prescripción, pues mientras la Autoridad responsable sostiene que, conforme a los Artículos 328 y 7o. transitorio de la Ley Federal del Trabajo, la prescripción corre a partir de la fecha en que las obligaciones se hicieron exigibles, sostienen los recurrentes que el plazo sólo puede empezar a con tarse desde la terminación del servicio, o sea desde que el contrato ha dejado de tener vigencia. Esta Sa la ha sostenido en varias ejecutorias la segunda de - las tesis mencionadas, por estimar que debía aplicarse el Artículo 1161 del Código Civil, en primer lugar, porque la Legislación del trabajo no puede ser menos liberal que el derecho civil, y en segundo, porque se estimó que no era posible que los trabajadores, mien-- tras estaban al servicio del patrón, presentaran en con tra de éste demandas, exigiéndole el pago de salarios o el cumplimiento de otras prestaciones, pues esto -- traería consigo una fuente constante de discordias; pe ro, por las razones que en seguida se expresan, conside ra esta Sala necesario modificar su jurisprudencia, es tableciendo que la prescripción, de acuerdo con los Ar tículos 328 y 7o. transitorio de la Ley Federal del Tra bajo, corre desde el momento en que se hacen exigibles las respectivas obligaciones. En numerosas ejecuto-- rias se ha afirmado que el derecho del trabajo es inde pendiente del civil y que, en esa virtud, no es posible aplicar, a propósito del primero, las disposiciones - consignadas en el segundo; por tal razón, se hace indis

pensable considerar nuevamente el problema de la prescripción para decidir si, de conformidad con los principios fundamentales que rigen el derecho del trabajo, puede estimarse que, dentro de ellos, se encuentre el relativo a que la prescripción sólo corre a partir de la fecha de terminación del servicio. El derecho del trabajo tiene un contenido especialmente económico y -- si bién es verdad que su función principal es la de -- proteger a la clase trabajadora, elevando sus condiciones de vida, también lo es que, determinar las obligaciones de los patrones, implica una intervención en -- los fenómenos de la producción, intervención que está necesariamente limitada por las posibilidades y exigencias de las industrias; en otros términos, al intervenir el Estado en el fenómeno de la producción en beneficio de la clase trabajadora, no puede desconocer la situación de las Empresas, ni ignorar las consecuencias fatales que, para su existencia, pueda acarrear determinado principio; ahora bién, se ha venido notando que, el amparo de la tésis sustentada por esta Sala, se han presentado una serie de demandas en las que se reclama el cumplimiento de obligaciones anteriores en muchos años, en ocasiones a partir de 1917, fecha en que entró en -- vigor la Legislación del trabajo; y en la mayor parte de los casos prosperan esas reclamaciones, por la única razón de que no funciona la prescripción, pues es -- imposible exigir que los empresarios conserven los elementos probatorios durante quince, veinte ó más años;

y esa condenación es perjudicial para la estabilidad de las industrias que nunca saben cual pueda ser su verdadera situación, ya que en cualquier momento, -- puede surgir una demanda por pago de horas extras ú otra prestación como ya se dijo, de diez, quince o -- más años; y en perjuicio lo reciente, no sólo la Empresa, sino la sociedad en general y aún los mismos trabajadores, puesto que la fuente de trabajo puede ser arruinada en un momento dado, merced a una de -- esas demandas, destruyéndose así un medio de vida para los obreros y de riqueza para la sociedad. Finalmente, el argumento que se ha hecho valer en el sentido de que no es posible que los trabajadores mientras están al servicio del patrón, presentan en su -- contra las reclamaciones a que tuvieren derecho, tampoco se justifica en la práctica, puesto que constantemente se nota que los obreros demandan de sus patrones las violaciones en que éstos incurren en el cumplimiento de los contratos o de la Ley, sin que esa demanda altere, substancialmente, la disciplina o la armonía en el taller, ni produzca tampoco consecuencias enojosas para los trabajadores, sino que la tésis que viene combatiendo tiene el inconveniente de que si los trabajadores se ajustaran a ella, autorizarían al patrón a que, de manera permanente, violara la Ley, a reserva de exigirle, años después, la -- responsabilidad consiguiente, situación que es contraria a la finalidad perseguida por el derecho del tra

bajo, cuyo objetivo es, no tanto que los trabajadores obtengan determinadas cantidades de dinero, sino que el servicio se preste en las condiciones y forma prescritas por la Ley y los contratos, finalidad ésta que se logra mejor cuando los trabajadores, tan pronto - se produzca una violación, formulan la demanda correspondiente. A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que la interpretación de los Artículos de la Ley Federal del Trabajo sobre prescripción conducen a -- idéntico resultado, ésto es, a decir que el término para la prescripción empieza a correr desde que la - obligación se hace exigible; la lectura de los artículos 329 y 330 indica, sin dejar lugar a duda, que la prescripción corre desde el momento en que la parte - interesada puede acudir a los Tribunales deduciendo - la acción correspondiente; en la fracción I del artículo 329 se dice que cuando se trata de intimidación, - el término para la prescripción corre desde que la intimidación cesa; en la Fracción II del mismo precepto se previene que el plazo de la prescripción se cuenta a partir del momento en que el trabajador, que estuvo impedido de trabajar, queda en aptitud de desempeñar las actividades propias de su puesto; en la Fracción III se estatuye que el término en cuestión empieza a contarse desde que el trabajador es separado, y en la Fracción IV que el término empieza a contarse desde que el trabajador dá causa para la separación o desde

que sean conocidas las faltas; en el 330, a propósito de indemnizaciones por riesgos profesionales, se previene que la prescripción empieza a correr desde que se - determine la naturaleza de la incapacidad o de la enfermedad contraída, o desde la muerte del trabajador; en todos estos casos, se nota que la intención del Legislador ha sido que la prescripción corra desde que - el trabajador o patrón están en aptitud de acudir a los Tribunales, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones de su contraparte o de las disposiciones legales - y siendo esto así, no existe razón para concluir que - la regla general sea distinta de la que inspiró los diversos casos que, de manera expresa, quedaron previstosos en la Ley.

CITAS BIBLIOGRAFICAS:

- 1.- **Diario de los Debates del Congreso Constituyente. Tomo I, páginas 716 a 740.**

- 2.- **Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 1917-1954, Tomo III, páginas 1454. Tesis 191.**

CAPITULO CUARTO.

LA PRESCRIPCION Y SU REGULACION EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

- a).- Comentarios sobre su Articulo relativo.
- b).- Prescripción, término para la prescripción. Es de un año cuando se demanda la asignación de un empleo, por ascenso, en los términos del Contrato Colectivo de Trabajo.
- c).- Prescripción en materia laboral.
- d).- Nuestro Comentario en cada caso.
- e).- Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado.
- f).- Ley del Seguro Social.

a).- COMENTARIOS SOBRE SU ARTICULO RELATIVO.

Nuestros constituyentes de 1917, se preocuparon y velaron porque los derechos de los trabajadores quedaran garantizados en la Constitución Política, así vemos como en su Artículo 123 están plasmados con el único fin y propósito de que su seguridad laboral y económica que sea humana y más digna, considerando que obrero y patrón son dos personas diferentes y ubicadas en posiciones también diversas, razón por la que partiendo de esa situación, Nuestra Carta Magna es obrerista cien por ciento como se desprende del Título Sexto del Trabajo y de la Previsión Social; pero al legislarse nuestra Ley Federal del Trabajo, no se vió con esos mismos ojos a nuestra clase obrera, sino que lo hizo de manera igual que tratándose de los patrones, como ejemplo tenemos el Artículo 516 del referido Código Laboral, y que constituye la regla general, al estipular el plazo de un año para que ambos ejerciten sus respectivos derechos, de donde se desprende que los considera iguales, social, política y económicamente, lo cual carece de toda justificación para éllo, hecho que podemos preveer al menos en su Articulado relativo a la prescripción de los derechos de ambas partes, no obstante como antes dijimos, además de que se debilitan y opacan los fines protectores que nuestra Constitución previene en su favor a los trabajadores, se trata igual a desiguales como también se hace en los términos en que fué redactado el Artículo 517 que -

concede un mes, tanto a obreros como a patronos para que ejerciten sus derechos, lo cual a nuestro juicio, estimamos que debe estipularse un plazo diferente para cada uno, más amplio para el trabajador y menos para el patrón, esto en el supuesto caso de que hubiese base legal para que los derechos de los trabajadores estén sujetos a prescripción.

El artículo 516 ordena: "Las acciones - de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea -- exigible con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes". No obstante las situaciones - que se debieron preveer como lo indicamos en párrafos anteriores, sin haberse hecho y todavía se restringen aún más los derechos obreros al estipularse plazos -- más reducidos como lo son el de uno y dos meses que - contienen los artículos 517 y 518 del Código Laboral citado y que constituyen, así como el artículo 519, - las excepciones que la misma Ley señala.

La obligación es exigible y por lo tanto la parte en cuyo perjuicio va a transcurrir la prescripción, y puede acudir a los Tribunales, desde que ésta tuvo perfecto conocimiento del hecho relativo para así poder ejercitar su acción, esto se desprende de las - tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia.

Prescripción, término para computar la.-

Para computar el término de una prescripción , es necesario dejar probado que aquella parte en cuyo perjuicio va a ocurrir la prescripción, tuvo perfecto conocimiento del hecho relativo para poder ejercitar, en su caso, las acciones motivo de la misma.- Amparo Directo 9298/1967.- Ramón Olvera. Junio 14 de 1968. 4a. Sala. Sexta época.- Volúmen CXXXII quinta parte, página 28.

Prescripción. La lectura de los Artículos 329 y 330 (ahora 516 y 517) de la Ley Federal del Trabajo, indican sin dejar lugar a dudas, que la prescripción corre desde el momento en que la parte interesada puede acudir a los Tribunales, deduciendo la acción correspondiente. Jurisprudencia: Apéndice - 1917-1965, quinta parte. Tesis 115, página 117.

En la primera de las citadas tesis, el demandado debe probar ante la Junta, que la Actora - tuvo conocimiento del hecho que originó el ejercicio de la acción respectiva, pues de otra manera no puede computarse el término prescriptivo.

En cuanto a la segunda, la parte Actora puede acudir a los Tribunales Laborales inmediatamente cuando sea despedido el trabajador por ejemplo, o se le rescinda el Contrato, ó sea cuando surja un hecho que de motivo para que la parte interesada pueda acudir a dichos Tribunales.

Como antes dijimos, nuestro máximo Tribunal, a partir del momento en que admitió la prescripción de los derechos obreros en nuestra citada Ley Federal del Trabajo y más adelante, la constitucionalidad de dicha institución, los señores Ministros de la Cuarta Sala, han seguido los lineamientos que los señores legisladores marcaron en el citado Código Laboral, siendo perjudicial el resultado para nuestra clase obrera, y si a éste le agregamos la corrupción que prevalece en los Tri bunales del Trabajo, bien se puede pronosticar el resul tado en un juicio laboral, pues el patrón generalmente ejerce cierto control ante dichas Autoridades. ya por amistad o por dádivas económicas, obteniendo así laudos a su favor, no obstante que en muchas ocasiones no exis te base legal para dictarse dicho fallo en esos térmi - nos, consecuentemente se viola en perjuicio de los tra - bajadores la Ley Federal del Trabajo y más aún las ga - rantías constitucionales consagradas en nuestra carta - magna.

Un ejemplo que queda comprendido en el precep - to legal a que se esta refiriendo, es el caso del tra - bajador que exige la signación de un empleo, aduciendo que tiene derecho a ascender conforme al contrato co - lectivo de trabajo, es decir que hizo la solicitud - oportuna y que fue postergado porque indebidamente se - prefirio a otro trabajador, así lo señaló la Suprema - Corte de Justicia en la siguiente tesis.

b).- PRESCRIPCION, TERMINO PARA LA.- ES DE UN AÑO CUANDO SE DEMANDA LA ASIGNACION DE UN EMPLEO, POR ASCENSO, EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

Si un trabajador exige la asignación de un empleo, aduciendo que tiene derecho a ascender conforme al Contrato Colectivo de Trabajo, que hizo la solicitud oportuna y que fué postergado porque indebidamente se prefirió a otro trabajador con menores derechos, debe entenderse que se trata de una acción derivada de un pacto colectivo; por lo que si en la demanda laboral no se hace referencia alguna a un despido ó separación del empleo, ni se llega a solicitar, tácita ó expresamente la reposición del demandante en una plaza determinada, debe concluirse que el término de la prescripción del derecho ejercitado en ésos términos, es de un año, conforme al Artículo 328 (ahora 516) de la Ley Federal del Trabajo 1931 y 1970 respectivamente. Amparo Directo. - 6381/1964. Ferrocarriles Nacionales de México. Junio 29 de 1966, 4a. Sala, Sexta época. Volúmen CVIII. Quinta parte, página 29.

En virtud, el trabajador tiene el término de un año para ejercitar sus derechos correspondientes, a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, esto es a partir del momento en que el obrero tiene perfecto conocimiento del hecho que motivó el transcurso del plazo prescriptorio y en cuyo perjuicio ha de transcurrir, interpretación que hacemos

de acuerdo con la tésis sustentada por la Suprema Corte de Justicia. Otra tésis emitida por nuestro máximo Tri
bunal también considerado dentro del artículo 516 de la citada Ley vigente es como sigue:

c).- PRESCRIPCION EN MATERIA LABORAL.

Conforme al artículo 328 (ahora 516) de la Ley Federal del Trabajo, prescribe en un año las acciones que nazcan de esta Ley (de trabajo) o del Contrato de Trabajo, sea Colectivo o individual. De manera que para que se pueda alegar prescripción, es menester que exista una acción procedente que ejercite, y para que - una acción exista o sea procedente, debe nacer de un de
recho y de la obligación correlativa, establecidos en - el Contrato o en la Ley, si la Ley no otorga tal derecho ni se demuestra que el Contrato lo confiera, es incon-
cluso que no exista tal acción prescriptible. Amparo - Directo 950/1955. Jorge Delgado. 11 de Febrero de 1957.
4a. Sala. Boletín 1957, página 155.

Dicho precepto legal a que se refiere la - tésis que antecede, debió conceder plazos diferentes a obreros y patrones, para que el término de diez años - que señala; solo fuese para la clase trabajadora y en cuanto a los patrones, concederles un plazo de un mes - para todos los casos en los cuales deba ejercer sus de-
rechos y las excepciones sobre este particular, de quin-
ce días.

d).- NUESTRO COMENTARIO EN CADA CASO.

Por otra parte el artículo 517 establece;
prescriben en un mes:

I.- Las acciones de los patrones para des-
pedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y
para efectuar descuentos en sus salarios.

II.- Las acciones de los trabajadores para
separarse del trabajo.

En los casos de la Fracción I, la prescrip-
ción corre a partir, respectivamente, del día siguiente
a la fecha en que se tenga conocimiento de la separación
o de la falta, desde el momento en que se comprueben los
errores cometidos, o las pérdidas o averías imputables
al trabajador, o sea, desde la fecha en que la deuda sea
exigible.

En los casos de la Fracción II, la prescrip-
ción corre a partir de la fecha en que se tenga conoci-
miento de la causa de separación.

Las siguientes tesis sustentadas por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con
el derecho que el artículo 517, Fracción I, concede a -
los Patrones en contra de sus trabajadores, en los casos
que en el mismo se indican; como y a partir de qué mo-
mento debe empezar a transcurrir en perjuicio del Patrón

el derecho que la Ley Laboral le otorga precisamente a partir del momento en que se dé causa para la separación, siempre que esta causa sea del conocimiento inmediato del Patrón.

Prescripción en Materia Laboral. De acuerdo con una lógica interpretativa de la Fracción IV de la Ley Federal del Trabajo (ahora 517 Fracción I), en concordancia con el penúltimo párrafo de la Fracción V (ahora II) del mismo artículo, el término de un mes - para que prescriba el derecho patronal para despedir - justificadamente a sus trabajadores, debe empezar a contarse cuando se de causa para la separación, siempre - que esta causa sea del conocimiento del patrón, pues - tratándose de un acto clandestino llevado a cabo por - el trabajador quién la cometió, no puedo empezar a correr el término de prescripción. Amparo Directo 8873/1a. Fallo el 16 de Noviembre de 1956. Ferrocarriles Nacionales de México.

Prescripción. Ya se ha resuelto que cuando para conocer la naturaleza de esa falta cometida por un trabajador, sea necesaria una investigación minuciosa, pues tratándose de una falta de aquellas que se cometen ocultamente mediante maniobras encaminadas a éllo, el término de prescripción para despedirlo solo empieza a correr desde el momento en que practica la indispensable investigación, se conoce efectivamente la falta y se sabe con certeza quién la cometió; sien-

do diferente este supuesto a áquel en que las faltas por su naturaleza son conocidas en el momento mismo de ser cometidas. Amparo Directo 4195/1957/2a. Federico Flores Ortiz. Fallado el 6 de Junio de 1958. 4a. Sala. Informe 1958, Página 30.

Prescripción. El término de la prescripción de las acciones para disciplinar las faltas de los trabajadores, cursa desde el momento en que, el superior jerárquico del trabajador faltista, a las órdenes de quien se encuentra éste, conozca la falta, porque tiene el deber de vigilar que sus empleados cumplan con las obligaciones que les corresponden, derivadas del nombramiento y del reglamento de trabajo.... Si comunica esas faltas fuera del término de un mes al Jefe encargado de disciplinarlas, la acción para el efecto indicado ha prescrito de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 517 Fracción I de la Ley Federal del Trabajo. Amparo Directo 1108/1954/2a. 28 de Enero de 1955, Página 20.

Prescripción. Si el Patrón dispone descontar del salario de un trabajador determinada cantidad periódicamente para cubrir responsabilidades en que incurrió dicho trabajador, la prescripción de la acción para reclamar tal medida, corre a partir de la fecha en que el mencionado trabajador haya tenido conocimiento y concluye un mes después, ya que según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, de los Artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la prescripción corre desde el momento en que la parte interesada

da pueda acudir a los Tribunales de Trabajo a derivar la acción correspondiente. Amparo Directo 1938/1956. Joaquín Morales Cruz y Coags. 3 de Julio de 1957. 4a. Sala. Boletín 1957, Página 1958.

Prescripción. Fecha en que empieza a computarse el término respecto a acciones derivadas de las faltas de los trabajadores. El hecho de que la Empresa tenga conocimiento de una falta atribuida a un trabajador, no significa que desde ese momento empiece a correr el término para la prescripción, sino que éste contará a partir de la fecha en que se tenga la certeza de que la falta fue realmente cometida, -- después de practicarse la investigación correspondiente. Amparo Directo 3455/1967. Elena Alejandri. Fallado el 16 de Octubre de 1968, 4a. Sala. Sexta época. Volúmen CXXXVI. Quinta parte, Página 37.

Prescripción. De la acción del Patrón para disciplinar sus faltas, para despedir justificada a los trabajadores. Los trabajadores deben alegar oportunamente la pérdida del derecho del Patrón por haber transcurrido el mes a que se refiere la Fracción IV del Artículo 329 (ahora 517 Fracción I) de la Ley Federal del Trabajo. Cuando el trabajador en un juicio laboral no alega oportunamente o para disciplinar sus faltas, por haber transcurrido el mes a que se refiere la Fracción IV del Artículo 329 (ahora 517 Fracción X de la Ley Federal del Trabajo), las Juntas de

Conciliación y Arbitraje no pueden decidir sobre la pérdida de ese derecho, por no ser cuestión que se les hubiese propuesto y de hacerlo, violarían lo dispuesto en el artículo 551 (ahora 776) de la propia Ley del Trabajo, que establece que los Laudos deben ser congruentes en el negocio. Amparo Directo 726/1959. Emma Zúñiga. Fallado el 11 de Abril de 1969. 4a. Sala. Boletín 1960. Página 427.

Prescripción. Si el trabajador despedido pretende que para la fecha en que el Patrón rescindió el Contrato de Trabajo ya había prescrito su derecho a hacerlo, debe probar que entre el día en que tuvo conocimiento de los hechos que motivaron el despido y la fecha de éste, transcurrió el mes que la Ley señala para la prescripción. Amparo Directo 4254/1956. Ferrocarriles Nacionales de México. Fallado el 26 de Agosto de 1957. 4a. Sala. Boletín 1957. Página 562.

Prescripción, iniciación de la. En caso de faltas de asistencia injustificada. No es exacto que el derecho del Patrón para rescindir el Contrato de Trabajo de un trabajador que falta más de tres veces sin causa justificada a sus labores en un mes, prescribe el mes siguiente de la fecha en que haya ocurrido la primera falta de asistencia, sino que como bien lo hace resaltar la Junta responsable, el punto de partida del período de la prescripción es el día siguiente de áquel en que el trabajador falta por

cuarta vez a sus labores sin causa justificada, pues no es sino hasta ese momento que nace la acción rescisoria del Contrato de Trabajo. Amparo Directo -- 6697/1958. Joaquín García G. Junio 22 de 1960. 4a. Sala Sexta época, Volúmen XXXVI. Quinta parte, página 91.

En cuanto a la Fracción II del artículo 517, a continuación incluimos la tesis sustentada por nuestra máximo Tribunal y que expresa:

Prescripción, cuando comienza a correr el plazo prescriptorio. Si un hecho afectado por el Patrón, a la obediencia a una orden dada por el mismo no causa perjuicio a los trabajadores, éstos carecen de interés para ejercitar una acción en contra del Patrón, solo cuando aquel acto viene a producirse en perjuicio para los trabajadores, es cuando nace el interés de éstos para ejercitarlo, comenzando entonces a correr el plazo prescriptorio. Amparo Directo --- 4224/1957. José Porras Pulido. 30 de Noviembre de 1960. 4a. Sala. Boletín 1961. Página 36.

Como se desprende del contenido del mencionado artículo 516 del ordenamiento legal aludido, restringe los derechos de los trabajadores y les concede iguales oportunidades de término como a los Patrones, contrariando con éllo el espíritu social del Artículo 123 Constitucional, porque éste protege, vigila y procura los derechos de la clase obrera y con-

templa en forma diferente a los desiguales. Situación que no fué prevista en nuestro Código Laboral, particularmente en su Articulado relativo a la prescripción; en que se concede igual plazo a Patrones y Obreros, pués a éstos últimos debió estipularse un término mayor, o sea de 10 años para que se separen del trabajo y de un mes para el Patrón como ya está regulado en dicho precepto, plazo máximo que es suficiente para que los Patrones ejerciten sus derechos, que en la Fracción I les otorga dicho precepto legal, dada su ubicación que -- guarde frente al trabajador que es diferente sobre todo política y económicamente así como social, y como -- antes dijimos, las excepciones que en todo caso se estipulan en favor de los Patrones fuesen de 15 días. -- En caso previsto por la Fracción II, como ya se inició en párrafos anteriores, debería ser de diez años para que el trabajador se separe del trabajo, además de que; de comprobarse las causas o motivos por los que se separe del trabajo y en cuyo perjuicio se sucedan, se imponga una multa al Patrón que resulte responsable de -- las faltas o causas de rescisión que invoca el Artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, para que en esa forma se cumpla al menos en parte con la función en -- pro del obrero, previsto en nuestro Artículo 123.

El Artículo 518 del Código Laboral citado, establece:

Prescriben en dos meses las acciones de --

los trabajadores que sean separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación.

La Suprema Corte de Justicia ha emitido diversas tesis, y que versan sobre la manera como opera el término prescriptorio que señala el referido Artículo.

Despido injustificado, término de la prescripción de la acción en caso de.- El Artículo 328 (ahora 516) de la Ley Federal del Trabajo, contiene la regla general de que las acciones que nazcan de la Ley Contrato, prescriben en un año; y los Artículos 329 y 330 (ahora 517 y 518) del mismo ordenamiento, contemplan los también (ahora el 519) casos de excepción a ese principio general al disponer que prescriben en un mes o dos años respectivamente, las acciones que los mismos preceptos señalan, encontrándose entre las primeras, las acciones que concede a los trabajadores la Fracción XXIII (Artículo 123 Fracción XXIII). Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquier otros en los casos de concurso o de quiebra; del Artículo 123 Constitucional que son las que nacen o tienen su origen en el despido injustificado que lleva a cabo el Patrón en perjuicio del trabajador. Por lo tanto, cuando un trabajador que es despedido injustificadamente y se presentó con posterioridad en su trabajo, demanda el pago de sa

larios caídos durante el tiempo que surtió sus efectos dicho despido, teniendo en cuenta que tal acción tuvo su origen en la aludida destitución, debe estimarse -- que el término de prescripción correspondiente es el -- de un mes, sin que obste para el efecto que la Legislación se funda en alguna de las Cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, y se pretenda que por élllo el -- término prescriptorio sea de un año, porque aún así, -- la prescripción prevista en los Contratos de esa especie siempre estará regida por las normas establecidas a -- ese efecto por la Ley. Amparo Directo 9087/1964. Fallado el 3 de Febrero de 1966. Ferrocarriles Nacionales de México. 4a. Sala, Sexta época. Volúmen CIV. -- Quinta parte. Página 11.

Prescripción de la acción del trabajador despedido. Para que comience a transcurrir el término de la prescripción, es indispensable que el trabajador tenga noticias de que fué despedido, puesto que lo que constituye el despido no es la decisión del Patrón de dar por terminada la relación laboral, sino el hecho -- de comunicársela a áquel; por lo que si no se prueba que tuvo conocimiento de su separación en fecha anterior a aquélla en que confesó haberlo sabido, y ésta -- queda comprendida dentro de los treinta días anteriores al de presentación de la demanda, no puede considerarse que la acción ejercitada prescribió, aunque la fecha en que el Patrón dijo haber rescindido el Contrato, --

sea anterior. Amparo Directo. 6054/1956. Resuelto el 14 de Noviembre de 1957.- Samuel López Jurado.

4a. Sala. Boletín 1957, página 750.

La tesis anterior se refiere al término de un mes que la Ley Federal del Trabajo estipulaba, pero dicho plazo fué aumentado a dos meses, reforma que estimamos en nada beneficia a la clase obrera, - pues esa pequeña ampliación de un mes ha funcionado dentro de las restricciones que la misma Ley Federal del Trabajo contiene al regular la prescripción de - sus derechos, esto significó devolverle los derechos que con ese motivo se arrebataron a la clase trabajadora. Ya en párrafos posteriores manifestamos que - como la prescripción de los citados derechos debe de saparecer, o al menos que el término de dos meses se amplíe a diez años, para que de esa manera nuestros obreros tengan más posibilidades de hacer valer sus respectivos derechos, y para acercar más nuestra Legislación Obrera con los principios obreristas previs tos por el Artículo 123 Constitucional, que viene a nivelar las relaciones entre Capital y Trabajo y así equilibrar en favor de la clase débil los conflictos laborales. La acción en los de despido, debe ejerci tarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el Patrón se lo comunique por escrito al trabajador, aviso escrito de la fecha, y causa o causas de la rescisión, adición que acertadamente se hizo -

al aludido precepto legal, pues hace que el obrero una vez enterado del despido, la fecha y causa o causas del mismo, éste se encuentre en aptitud de acudir a los Tri bunales a hacer valer sus derechos correspondientes, ya que mientras no reciba del Patrón el aviso por escrito indicado, no puede empezar a correr en su perjuicio el término prescriptorio, y también el Patrón que rescinda o despida al obrero, no podrá oponer como excepción - otras causas distintas de las que motivaron el despido que comunicó al trabajador. Vemos que esto ya es una garantía para el trabajador quien necesariamente debe protegérsele para que sus derechos que el Artículo 123 Constitucional estipula en su favor, se cumplan. Consi deramos muy acertada la medida de que el Patrón dé aviso por escrito al trabajador de las causas de rescisión o despido, pues en muchas ocasiones éste desconoce los motivos por los que ya no se permite seguir trabajando en la Empresa, en virtud de que el Patrón por conducto de terceras personas evita que áquel continúe laborando; por lo que la Ley debe obligar al Patrón a que avise por escrito al obrero en los casos de rescisión o termina-- ción de las relaciones laborales y del Contrato, así co mo del despido justificado o injustificado, en el que - también se señale la fecha y causa o causas que motiven el hecho respectivo.

El Artículo 519 establece, prescriben en dos años:

I.- Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo.

II.- Las acciones de los beneficios en -- los casos de muerte por riesgo de trabajo.

III.- Las acciones para solicitar la ejecución de los Laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas.

La prescripción corre, respectivamente, - desde el momento en que se determine el grado de incapacidad para el trabajador; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente en que hubiese quedado notificado el Laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el Laudo imponga la obligación de reinstalar, el Patrón podrá solicitar de la Junta, que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que - de no hacerlo, podrá el Patrón dar por terminada la relación de trabajo.

La Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tésis referentes al precepto legal aludido, en los siguientes términos:

Primeramente, refiriéndose a la Fracción I que ordena, prescriben en dos años: las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo, y en su párrafo final agre-

ga que la prescripción corre desde el momento en que - determine el grado de incapacidad para el trabajo, nuestro Máximo Tribunal ha señalado las siguientes tesis:

Prescripción.- El Artículo 330 (ahora 519) de la Ley Federal del Trabajo, señala que prescriben - en dos años las acciones de los trabajadores para reclamar indemnización por incapacidad proveniente de accidente de trabajo o enfermedades profesionales, y agrega en su parte final que la prescripción en estos casos correrá hasta el momento en que se determine la naturaleza de la incapacidad que haya resultado al trabajador. En consecuencia, si la incapacidad del Actor se determinó once meses después de la fecha en que ocurrió el riesgo, la prescripción de la acción no podía correr a partir de esa fecha sino hasta aquella en que precisó la incapacidad que había resultado al trabajador, e inclusivo se le autorizó el pago correspondiente a dicha incapacidad, pues lógicamente antes de ese momento, no pudo determinarse la misma, ni ser exigible. Amparo - Directo 2775/1960. Angela Robles. Fallado el 17 de Marzo de 1961. 4a. Sala. Informe 1961. Página 22.

Riesgo profesional, momento en que empieza a correr el término de prescripción de la acción de indemnización por.- Teniendo en cuenta que el riesgo - profesional no puede precisarse conforme a los métodos técnicos o científicos, sino hasta que se conozcan los

efectos definitivos del mismo y las consecuencias que - produzcan, es hasta ese momento cuando, de acuerdo con la Ley, se realiza dicho riesgo profesional y comienza a correr el término para la prescripción de la acción correspondiente. Amparo Directo 7084/1964. Resuelto - el 2 de Agosto de 1965. 4a. Sala. Sexta época. Volúmen XCVIII. Quinta parte, página 61.

Prescripción, cuando debe empezar a correr - el término Prescriptivo. La prescripción no puede empezar a correr, sino desde el momento en que se determine la naturaleza de la incapacidad contraída, por establecerlo así el Artículo 330 (519 Fracción I) de la Ley - Federal del Trabajo. De manera que mientras el mal producido por el accidente se encuentre en proceso de avance y no se pueda precisar la incapacidad final que ha - de producir, no puede comenzar a correr el término prescriptorio. Amparo Directo 6752/1956. José María Solís Martínez. Resuelto el 1o. de Mayo de 1957. 4a. Sala. Boletín 1957. página 33.

Sobre el precepto legal antes comentado, es-
timamos que debió establecer un plazo de diez años y no de dos como lo hace actualmente, para que de esa manera los trabajadores tengan mayor oportunidad de ejercitar sus derechos en estos casos, pues cuando como consecuencia del riesgo de trabajo que sufre en su trabajo con - motivo del mismo hay casos en que el riesgo sufrido o - sea el accidente de trabajo o enfermedad profesional, -

el trabajador tiene necesidad de internarse por largo tiempo para su atención médica y en ocasiones se complica aún más dicha enfermedad o accidente sufrido, dada su condición física tan débil y crítica, lo que hace que constantemente se complique en su persona las enfermedades o accidentes que con motivo del empleo desempeñado, sufra en su persona, consecuentemente se ve imposibilitado para reclamar sus derechos ante los Tribunales laborales.

Complementando con la siguiente tesis jurisprudencial sustentada por la Suprema Corte de Justicia, referente a la forma y base calcular la indemnización correspondiente en los casos de riesgos profesionales.

Riesgos profesionales, disposiciones contractuales con beneficios superiores a la Ley en su caso de indemnización por.- Cuando se esta en el caso de calcular el monto de la indemnización que debe pagarse en los casos de riesgos profesionales, incluyendo la incapacidad temporal. procede tener como base el salario real que perciba el trabajador en el momento de sufrir el riesgo, aún cuando exceda del salario máximo que fija el Artículo 294 de la Ley Federal del Trabajo, si es que las disposiciones contractuales celebradas entre el Patrón y el obrero ofrecen mayores beneficios para éste que los establecidos por la Ley Laboral. Dicho Tribunal concede mayores beneficios para nuestra clase obre-

ra, al señalar que la base para calcular la indemnización sea el salario que percibía el trabajador aún - cuando fuese mayor del que sea fijado como mínimo. - Amparo Directo 3045/1965. Fallado el 19 de Febrero de 1968.- Carlos Moctezuma Ochoa. 4a. Sala, Sexta época Volúmen CXXVI. Quinta parte.

Refiriéndonos ahora a la Fracción II del precepto legal de que se trata y que ordena, prescriben en dos años: Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo, agregando en su parte final que la prescripción corre desde la fecha de la muerte del trabajador. La Suprema Corte de Justicia, complementando su contenido ha sostenido la siguiente tesis jurisprudencial:

Riesgo profesional, derecho a la indemnización por los particulares en caso de. Carga de la prueba de la dependencia económica.- El artículo 297 (ahora 501) de la Ley Federal del Trabajo, determina - que tendrán derecho a recibir la indemnización en los - casos de muerte, la esposa y los hijos legítimos o naturales que sean menores de 16 años y los ascendientes. a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador, en cuyo caso pueden recibirla las demás personas que cita este precepto. Como puede verse, la esposa y los hijos legítimos o naturales, siempre y cuando éstos últimos tengan menos de 16 años al ocurrir el deceso del trabajador, por el solo hecho de tener -

esa calidad respecto de éste. adquirieran el derecho de recibir la indemnización. Si alguna persona desea excluirlos de la percepción de ese pago, necesita probar que no dependían económicamente del trabajador, pero no necesitan acreditar la dependencia económica dicha esposa é hijos, sino el extremo contrario los excluye cuando es probado por algún otro interesado. Amparo Directo 2349/1965. Julián Morales Cabrera y Coags. Agosto 27 de 1968. 4a. Sala. Sexta época. Volúmen CXXXIV. -- Quinta parte. Página 45.

También pensamos que el plazo concedido en la Fracción aludida es reducido, pues en su lugar debió ser de diez años para los familiares que, conforme a la Ley sean los beneficiarios del trabajador fallecido, tengan mayor oportunidad de ejercitar sus respectivos derechos en un plazo más amplio, hay casos en que los familiares derechohabientes desconocen el lugar donde trabajó y hasta el domicilio del mismo y otros factores que influyen para que éstos se encuentren imposibilitados - para acudir a los Tribunales a hacer valer sus derechos, que en la mayoría de las veces éstos desconocen y no acuden a ejercitarlos por lo mismo.

Refiriéndonos a la fracción III del mencionado Artículo que ordena: Prescriben en dos años, las acciones para solicitar la ejecución de los Laudos de - las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los conve--

nios celebrados ante éllas, aclarándo que la prescrip--
ción corre desde el día siguiente al en que hubiese que
dado notificado el Laudo de la Junta o aprobado el con-
venio. Cuando el Laudo imponga la obligación de reins-
talar, el Patrón podrá solicitar de la Junta, que fije
al trabajador un término no mayor de treinta días para
que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacer-
lo, podrá el Patrón dar por terminada la relación de -
trabajo.

Estimamos que esta Fracción III, en lugar -
de conceder dos años a los trabajadores para que ejerci
ten sus derechos ante los Tribunales Laborales, debe es
tipularse el término de diez años, para que de esta ma-
nera puedan ejercitar sus respectivos derechos en condi
ciones un poco más favorables, además de que cuando el
Laudo que se deba ejecutar sea para beneficio de los -
obreros, las Autoridades laborales deben hacerlo de ofi
cio, partiendo de la base de que dicho fallo haya sido
notificado legalmente como lo previene el Artículo 688
Fracción VII de la Ley Federal del Trabajo y demás con-
cordantes, y de que se haga dentro de las horas hábiles;
en cuanto al convenio que se haya celebrado ante la Jun
ta, primero debe estar sujeto a los principios del Artícu
lo 123 Constitucional y no contener renuncia de algún -
derecho consagrado en su favor, con base en lo estipula
do en la Fracción XXVII del citado precepto, así como -
en los Artículos 5o., 6o., 17, 18, 28, 33 y 34 de la Ley

Federal del Trabajo, que protegen a la clase desposeída contra las injusticias que en su perjuicio se puedan cometer, de manera que para que dicho convenio pueda ser válido, se requiere que se haga por escrito y contenga los requisitos señalados por la Ley.

De manera que, hasta el día siguiente al que se haya notificado el Laudo o celebrado el convenio, conforme a la Ley, hasta entonces puede transcurrir el plazo prescriptorio.

El Artículo 520 del Código Laboral en cuestión, alude: Que la prescripción no puede comenzar ni correr:

I.- Contra los incapaces mentales, sino que cuando se haya discernido su tutela conforme a la Ley.

II.- Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra.

La Suprema Corte de Justicia, ha sustentado la tesis en relación con la Fracción I, en los siguientes términos:

Prescripción, no corre contra los incapacitados mentales, de acuerdo con lo previsto por el Artículo 331 (ahora 520 Fracción I) de la Ley Federal del Trabajo, su correlativo de la Legislación Civil y el antecedente de ambos, que se encuentran en la Ley y Doctrina Francesas, la incapacidad mental constituye una salve

dad a la regla general que la prescripción corre contra todas las personas; por tanto, como la Actora estuvo mentalmente incapacitada, en el lapso en que debió presentar la demanda, no corrió en su perjuicio - el término ordinario en que prescriben las acciones - de reinstalación y pago de salarios caídos, y el Laudado impugnado que no consideró así, resulta violatorio de las garantías individuales consagradas por los Artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Ejecutivo: Informe 1969. 2a. parte. 4a. Sala. Páginas 58 y 59. Amparo Directo 2519/1969. Virginia Florida Posada. Resuelto el 26 de Septiembre de 1969.

Solo falta que Nuestros Legisladores cometieran el error garrafal de obligar a los incapacitados mentales para que en su perjuicio corriera el término prescriptorio, aún en el caso de que careciera - de tutor para que lo represente, y ejercite en su nombre los derechos que le correspondan y, en sus momentos de lucidez no es humano que corra en su perjuicio dicho término, sino que también requiere de tutor, para que entonces corra el plazo prescriptorio.

La Fracción II por su parte, también prohibe que corra la prescripción en contra de los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra, debió agregarse también, cuando éstos se en cuentren privados de su libertad, aún en el caso de - que éste haya sido o nó absuelto por sentencia ejecu-

torizada, así como en los demás casos que por fuerza mayor sea imposible que el obrero ejercite sus derechos correspondientes, para que de esta manera se cumpla en mayor proporción con los derechos que en su favor previene el Artículo 123 de Nuestra Carta Magna.

Vemos como el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, suprimió la causal relacionada con el arresto, pues únicamente origina la suspensión temporal de las relaciones de trabajo como lo previene el Artículo 42 del mismo ordenamiento aludido, que ha venido a garantizar en favor del trabajador, que aún cuando por enfermedad, incapacidad temporal, prisión preventiva, arresto y otros que el mismo señala, no se termina la relación laboral; a pesar de lo así estipulado por dicho precepto, el Artículo 47 señalaba como causal de la rescisión de la relación laboral del trabajador, por lo que aquí podemos observar una contradicción ya que si dicha causal solo origina la suspensión temporal de las relaciones de trabajo y a continuación se dice que la misma -- causal es motivo para la rescisión de la relación de trabajo, en buena hora se suprimió y corrigió tal situación; a es e agregamos de que cuando el trabajador se encuentre detenido por alguna autoridad, corre el término no prescriptorio a pesar de éllo, como se desprende de la siguiente tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia.

Prescripción, corre el término de la.- --

aunque el trabajador se encuentre privado de su libertad. Es inexacto que cuando el trabajador se encuentre detenido por alguna Autoridad, no corra el término prescriptorio, porque no está en la situación establecida por la Fracción IX del Artículo 116 de la Ley Federal del Trabajo; por otra parte es claro jurídicamente que aún considerándolo sujeto a prisión preventiva, puede ejercitar las acciones inherentes a la rescisión de su Contrato de Trabajo acudiendo ante los Tribunales por conducto de su Apoderado, ya que no se requiere que formule su reclamación en forma personal. Amparo Directo 606/1968. Fallado el 10. de Agosto de 1968. Almacenes Nacionales de Depósito, S. A. 4a. Sala. Informe 1968. Página 33.

Nuestro máximo Tribunal, como puede verse en la tesis antes aludida, perjudica en gran parte a la clase trabajadora, pues al menos debió aclarar que el término prescriptorio se inicia a partir del momento en que éste haya sido absuelto por la sentencia ejecutoria sin mencionar si se trata de arresto o por algún delito que supuestamente haya cometido, la causa por la que sea privado de su libertad, si es lo primero como ya dijimos en el Artículo 42 que la Ley indica, que el arresto del trabajador solo origina la suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el Patrón; tesis completamente contraria al espíritu obrerista del Artículo 123 de nuestra Constitución Política y aún de la Ley Federal del Trabajo, no obstante que ésta ha venido a registrar el área de los derechos de los trabajadores.

El Artículo 521 del mismo ordenamiento establece, que la prescripción se interrumpe:

I.- Por la sola presentación de la demanda o de cualquier promoción ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, independientemente de la fecha de la notificación. No es obstáculo para la interrupción que la Junta sea incompetente; y

II.- Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indubitales.

La Suprema Corte de Justicia, ha sustentado la siguiente tésis al respecto y con relación a la Fracción I, complementando su redacción.

Prescripción en materia Laboral. Cómputo de élla cuando cambie la acción.- La sola presentación de la demanda, interrumpe el curso del término de la prescripción de las acciones a que se refiere el Artículo - 329, (ahora 521 Fracción I) de la Ley Federal del Trabajo, pero exclusivamente respecto de las acciones que se hacen valer en dicha demanda y no en cuanto a las que - en ella se omiten, ejercitar o que se hacen valer, por cambio de acción en la audiencia de Demanda y Excepciones. Amparo Directo 8639/1947, 3897/1948, 4764/1952, - 5266/1953, 3365/1955. Jurisprudencia de la 4a. Sala. - Informe 1967. Página 23.

Debe suplirse la deficiencia, cuando sea el obrero quién interponga la demanda y en cuyo perjuicio - transcurra dicho término.

Prescripción, cómputo del término para la.- Si un trabajador denomina incorrectamente en su demanda a la entidad Patronal a la que prestó sus servicios, cabe estimar, que para computar el término de la prescripción, debe tomarse en cuenta la fecha de presentación de su demanda y no aquella en que con posterioridad salva - su ~~error~~ y aclara la denominación del Patrón. Amparo - Directo 1525/1966. Fallado el 9 de Febrero de 1967. Guillermo Duclas Ozuna. 4a. Sala. Informe 1967. Página - 29.

Prescripción. La presentación de la deman da interrumpe la prescripción aún cuando ella resulte de de fectuosa y se aclare en la audiencia de Demanda y Excepciones, pues tal aclaración purga el defecto que pregonan, y sus efectos se retrotaen al momento de la presentación de la demanda. Amparo Directo 4179/1954/1a. 30 de Mayo de 1955. Impulsora de Televisión, S. A. 4a. Sala. Informe 1955. Página 20.

Prescripción, la presentación de la demanda ante una Junta incompetente, interrumpe la.- Si bien es cierto que la prescripción se basa en el abandono de un derecho, también lo es si la demanda se presenta ante Au toridad incompetente, esta circunstancia no varía la intención del Actor, toda vez que su presentación interrum

pe el término prescriptorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 332 Fracción I (ahora 521 Fracción I) de la Ley Federal del Trabajo; así pues cuando la demanda se interpone antes de que transcurra el término prescriptorio señalado por la Ley, la acción obviamente no está - prescrita. Amparo Directo 5443/1965. José García Olvera. Julio 8 de 1965. 4a. Sala. Sexta época. Volúmen - XCVII. Quinta parte. Página 49.

Prescripción, interrupción de la.- La prescripción en materia de trabajo se interrumpe por la sola presentación de la demanda o escrito inicial, independientemente de que se notifique o no al demandado; ya que este acto no depende de la voluntad del Actor, y no sería - justo que la omisión en que incurrieran las Autoridades, redundara en perjuicio de aquél. Jurisprudencia: Apéndice 1917-1965. 5a. Parte. Tesis 117. Página 118 y siguientes.

Nuestro máximo Tribunal al emitir las tesis - antes mencionadas, lo hizo con buenos ojos al conceder al obrero ciertas facilidades que lo benefician; como por ejemplo cuando éste denomina incorrectamente a la entidad Patronal a la que prestó sus servicios al presentar su demanda, cuando ésta resulte defectuosa, cuando se presente ante Autoridad incompetente, casos en - que se interrumpe la prescripción con ese escrito.

Refiriéndonos ahora a la Fracción II del -- mismo precepto señalado en párrafos anteriores, esto es cuando la persona en cuyo favor corre la prescripción, - reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, - de palabra, por escrito o por hechos indubitables. Al - respecto la Suprema Corte de Justicia ha emitido la tée-- sis en el siguiente sentido.

Prescripción, interrupción, por reconocimien-- to del derecho del acreedor. Para que pueda considerarse que la prescripción se interrumpe en virtud de que el deudor reconoció el derecho del acreedor en forma indubi-- table; no basta la circunstancia de que el primero haya pagado al segundo determinada cantidad, si al hacerlo hi-- zo constar que se la entregaba con carácter gracioso, y como ayuda excepcional por esa única vez sin hacer refe-- rencia alguna a las cantidades que según el acreedor le adeudaba por otros conceptos.- Amparo Directo 5993/1958. Resuelto el 15 de Julio de 1960. José Contreras. 4a. Sa-- la. Boletín 1960.

La Fracción I debió incluir que cuando la -- parte en cuyo perjuicio comparece por sí o a través de su representante legal, se interrumpe la prescripción, o -- cuando éste tuvo la intención de acudir a los Tribunales y no lo hizo por causa de fuerza mayor que haya hecho im-- posible hacer valer sus derechos por medio de un escrito o en forma personal, o mediante su Apoderado, para prote-- en mayor proporción a nuestra clase desvalida.

Dicho precepto viene a conceder parte de los derechos que en los demás Artículos relativos a la prescripción, restringen en perjuicio de los obreros, de los cuales son titulares en el Artículo 123 Constitucional.

Artículo 522. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les corresponde. El primer día se contará completo, aún cuando no lo sea, pero el último debe ser completo, y cuando sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el primer día útil siguiente.

La Suprema Corte de Justicia a través de las siguientes tesis, ha dicho lo siguiente:

Prescripción en materia de trabajo. Como de acuerdo con el Artículo 329 (ahora 518) de la Ley Federal del Trabajo, prescriben en un mes --- (ahora dos meses) las acciones que concede a los trabajadores la Fracción XXII del Artículo 123 Constitucional. Esta Suprema Corte de Justicia ya ha resuelto repetidamente que dicho plazo debe computarse precisamente por un mes calendario y no por el número determinado de días, de que en el mismo se incluyen los domingos y días festivos que comprende el

mes correspondiente. Amparo Directo 1636/1959.
Javier López Morfín. Resuelto el 6 de Enero de
1960. 4a. Sala. Boletín 1960. Página 90.

Prescripción. Cuando termina en el -
sistema de la Ley Federal del Trabajo, análogo al
de las Leyes Civiles, cuando el último día del -
término de la prescripción es inhábil, no se ten-
drá por completo dicho término sino hasta el día
siguiente, de manera que si ese último día es -
domingo, la prescripción opera hasta el lunes in-
mediato posterior. Amparo Directo 1894/1962. Ri
to Vázquez Aguilar. Resuelto el 2 de Mayo de -
1963. 4a. Sala. Boletín 1963. Página 231.

El precepto legal que antecede no apor
ta derecho alguno en favor de los obreros, con--
cretándose a señalar el modo de contarse el térmi
no prescriptorio, pues el hecho de que se cuente
completo el primer día, aún cuando no lo sea, -
esto es injusto ya que en todo caso no debe con-
tarse sino hasta el siguiente, siempre que sea -
hábil, esto es, después de que se han restringi-
do los derechos laborales, el término que el --
obrero tiene para ejercitar sus derechos.

Vemos como aún nuestro máximo Tribunal en las diversas tesis aludidas, aplica principios en los mismos términos y forma para los obreros y - patronos, cuando que esto no debe ser, pues éstos - se encuentran ubicados en planos desiguales, razón suficiente para que el plazo que concede la Ley para ejercitar los derechos, como comentamos, debe - ser diferente para cada uno, así la forma de contar los días, deben incluirse los inhábiles como está - ordenado en la Ley y en las tesis aludidas, cuando transcurra en perjuicio de los Patronos; cuando - sean los obreros los perjudicados, no deben incluirse los días inhábiles, pues ya bastante tienen con soportar la restricción que la Ley Laboral hace de sus derechos, de manera especial en todo lo referente a prescripción contenida y regulada en el - mismo ordenamiento.

Finalmente, agregamos algunas tesis - que nuestro Tribunal Máximo ha emitido en relación con la prescripción, por ejemplo que ésta no es de orden público, que no opera de oficio, efectos - que produce, etc..

Prescripción.- La lectura de los Artículos los 329 y 330 (ahora 516 y 517) de la Ley Federal del Trabajo de 1931, indican sin lugar a dudas que

la prescripción corre desde el momento en que la parte interesada puede acudir a los Tribunales, deduciendo la acción correspondiente. Jurisprudencia: Tomo XLII. Quinta época. Páginas 2391 y 6127.

Prescripción, efectos de la.- La Institución de prescripción tiene por objeto la consorción de las situaciones jurídicas por el transcurso del tiempo, de tal manera que si una acción no se ejercita dentro del lapso que la Ley lo permite, la situación que se debería de modificar por el ejercicio de dicha acción, ya no es posible que se cambie, porque ya pasó el tiempo dentro del cual pudo hacerse. Amparo Directo 8598/1967. Pedro Sandoval L. Mayo 9 de 1968. 4a. Sala. Sexta época. Volúmen CXXXI, Quinta parte. Página 20.

Prescripción, la Junta carece de facultades para declarar de oficio que opera la.- Si la demanda no opuso en el juicio laboral la excepción de prescripción, en relación con el pago de vacaciones al trabajador, la Junta carece de facultades para declarar de oficio que ha operado la prescripción, sin haber el demandado opuesto la excepción respectiva, ya que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 541 (ahora 776) de la Ley Federal del Trabajo, su Laudo debe ser congruen-

te con la demanda y con las demás pretenciones deducidas oportunamente en el negocio, y debe decidir sobre los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, lo que significa, a contrario -- sensu que no debe ocuparse de cuestiones ajenas a la litis. Amparo Directo 1667/1964. Alejandro -- Jaime. Julio 20 de 1965. 4a. Sala. Sexta época. Volúmen XCVII. Quinta parte. Página 46.

Prescripción de las acciones es de órden público. El cómputo del término prescriptorio por ser de orden público, no puede quedar al arbitrio de una de las partes, es decir, no debe correr a partir de la fecha en que a juicio de la actora o demandad., ocurrió o ocurrieron los hechos fundatorios de sus acciones o excepciones, sino que debe computarse desde la fecha en que realmente -- acontecieron, de acuerdo con las pruebas rendidas en los autos del juicio. Amparo Directo 1528/1964. Martiniano Meléndez Zúñiga. Fallado el 3 de Febrero de 1966. 4a. Sala. Sexta época. Volúmen CIV. -- Quinta parte. Página 34.

Prescripción, interrupción improcedente de.- La prescripción, por ser de orden público, solo se interrumpe en los casos señalados por la -- Ley Laboral, sin tomarse en cuenta lo que sobre

el particular se establezca en un Contrato Colectivo de Trabajo. Amparo Directo 2190/1966. Ferrocarriles Nacionales de México. Enero 5 de 1965. 4a. Sala. Sexta época. Volúmen CXV. Quinta parte. Página 28.

Prescripción. No procede la excepción - de prescripción opuesta por la Empresa demandada, si no demuestra la fecha en que hizo del conocimiento -- del trabajador la rescisión de su contrato, pues no - existe base para computar el término relativo. Ejecutoria: Informe 1973. 2a. Parte. 4a. Sal . Página 51. Amparo Directo 5877/1972. María de Jesús López G. 8 de Febrero de 1973.

Prescripción.- Excepción de.- Al oponer se la excepción de prescripción, debe indicarse la fecha en que empezó a correr el término, por ser elemento constitutivo de dicha excepción. Ejecutoria: Informe 1973. 2a. Parte. 4a. Sala. Página 51. Amparo Directo 3319/1972. Julio Mares Torres y Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Sec--ción 13. Noviembre 22 de 1972.

Deseamos hacer notar que para que opere la prescripción, ésta debe oponerse por la parte demandada, indicándose la fecha en que empezó a correr el término, así como la fecha en que hizo del conocimien

to del trabajador el hecho que motivó oponer dicha excepción, pues se trata de elementos fundamentales de la misma, como se desprende de la tésis que antecede.

La regulación de la prescripción de -- los derechos obreros en otros ordenamientos. Labo-
rales.

A. En la Ley Federal de los Trabajado-
res al servicio del Estado, Reglamentaria del Apar-
tado "E" del Artículo 123 Constitucional. Este or-
denamiento también utiliza indebidamente la palabra
acción por derecho, además de que su redacción coiñ
cide exáctamente con los de la Ley Federal del Tra-
bajo, pues establece los mismos plazos y prevee las
mismas situaciones, salvo dos pequeñas diferencias,
como son; que el ordenamiento que nos ocupa prevee
el plazo de un mes, y el caso cuando la prescripción
no comienza ni corre durante el tiempo que el traba-
jador se encuentre privado de su libertad, siempre
que haya sido absuelto por sentencia ejecutoria, he
cho que no se estipula en la Ley del Trabajo. A -
continuación transcribimos los Artículos que tratan
sobre la prescripción.

Artículo 112. Las acciones que nazcan

de esta Ley, del nombramiento otorgado en favor de - los trabajadores y de los acuerdos que fijen las condi ciones generales del trabajo, prescriben en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes:

Dicho precepto legal constituye la regla general, y señala el mismo término para los empleados así como para el Estado Patrón, trata igual a desigua les, económica y sobre todo políticamente, por éllo el plazo debe ser de un mes y no de un año para que el Estado ejercite los derechos que la Ley le concede, y para el empleado que sea de diez años al menos, ya que se regula en su perjuicio dicha prescripción.

Artículo 113. Prescriben:

I. En un mes:

a).- Las acciones para pedir la nulidad de - un nombramiento.

b).- Las acciones de los trabajadores para - ejercitar el derecho a ocupar la plaza que hayan deja do por accidente o por enfermedad, contado el plazo - a partir de la fecha en que estén en aptitud de vol-- ver al trabajo.

Como se puede ver, este precepto restringe -

demasiado los derechos de los empleados, pues siquiera por equidad humana, no debería comenzar a correr en su perjuicio la prescripción, cuando éstos por motivos de accidente o enfermedad hayan dejado de ocupar su plaza, ya que se trata de una suspensión temporal de las relaciones laborales que el estado debe proteger al empleado en los términos de la Fracción XI del Apartado "B" de nuestra Carta Magna que se refiere a la seguridad social de éstos; para mejorar un poco esta situación, debe ampliarse a diez años - para los trabajadores y de un mes para el estado.

II.- En cuatro meses:

a).- En caso de despido o suspensión - injustificados, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la Ley - concede, contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador, del despido o suspensión.

Debe obligarse al Estado a que éste notifique por escrito al empleado, comunicándole la fecha y causa del despido, así como en los casos de terminación del Contrato, rescisión del mismo, para que con ésto, dicho empleado esté en posibilidades de acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; el plazo de dos meses debe ampliarse a diez años, para

ra subsanar en parte dicha restricción que en perjuicio de éstos se ha establecido.

b).- En suspensión de plazas, las acciones para que se les otorgue otra equivalente a la su primida o la indemnización de la Ley, y

También debe ampliarse en favor del empleado dicho término a diez años, comunicándole por escrito la fecha y la causa de la suspensión de esa plaza.

c).- La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores, - contando el término desde que sean conocidas las cau sas.

El término debe ser de un mes y no de cuatro para que el funcionario ejercite sus derechos en contra del empleado, debe pues, reducirse para beneficio de éste.

Artículo 114. Prescriben en dos años:

I.- Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por incapacidades provenientes de riesgos profesionales realizados.

En este caso, nuestros Legisladores actuaron con un poco de espíritu proteccionista del obre-

ro, pero debe ampliarse a diez años por razones de justicia y equidad, así como de seguridad social, en favor de éstos.

II.- Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los trabajadores muertos con motivo de un riesgo profesional, realizado, para reclamar la indemnización correspondiente, y

También por tratarse de situaciones - perjudiciales en grandes proporciones para el empleado, es necesario que se le conceda diez años para que los familiares del obrero fallecido, hagan valer sus respectivos derechos.

III.- Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Cuando sean los empleados quienes tengan interés en que se ejecute dicha resolución, el plazo debe ser también de diez años, y no de dos - como hasta ahora, porque hay muchos casos en que - los familiares del empleado fallecido, desconocen el lugar de trabajo y aún por cuestiones de distancia la fecha en que éste muere.

La forma como debe contarse el plazo a partir de que momento se inicia éste, lo señalan los siguientes párrafos:

Los plazos para deducir las acciones a que se refieren las fracciones anteriores, correrán respectivamente, desde el momento en que se determina la naturaleza de la incapacidad o enfermedad contraída, desde la fecha de la muerte del trabajador o desde que sea ejecutable la resolución dictada por el Tribunal.

Las Fracciones I y II de este Artículo, solo son aplicables a personas excluidas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; porque la Ley relativa en su Artículo 32, protege y garantiza los casos de incapacidad por riesgos profesionales realizados, -- así como las prestaciones a que tienen derecho los familiares o quienes dependían económicamente del empleado fallecido.

Artículo 115. La prescripción no puede comenzar ni correr:

I.- Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la Ley.

El plazo para éstos casos también debe ser de cinco años, y en sus momentos de lucidez si los tuviera y no se le haya asignado tutor, tampoco debe transcurrir dicho término.

II.- Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra y que por alguno de los conceptos contenidos en esta Ley se hayan hecho acreedores a indemnización.

Se supone que al dejar su empleo por razones bélicas, existe lógicamente una relación laboral del empleado con determinada institución pública, razón suficiente para que éste sea un acreedor a indemnización sin necesidad de agregar a dicha Fracción la parte que señala.... "y que por alguno de los conceptos contenidos en esta Ley, se hayan hecho acreedores a indemnización.

III.- Durante el tiempo que el trabajador se encuentre privado de su libertad, siempre que haya sido absuelto por sentencia ejecutoria.

Al respecto deseamos aclarar, que la situación penal debe ser muy independiente a la relación laboral y no debe afectar a ésta, sea que se le absuelva o se le condene, en la sentencia ejecutoria respectiva.

Artículo 116. La prescripción se interrumpe:

I.- Por la sola presentación de la demanda respectiva ante el Tribunal Federal de Conciliación y - Arbitraje.

Debió agregar también como lo hace la Ley Federal del Trabajo, que se interrumpe igualmente cuando se presenta la demanda ante la Junta, aunque sea incompetente, con cualquier promoción que el empleado presente, independientemente de la fecha de la notificación.

II.- Si la persona cuyo favor corre la - prescripción reconoce el derecho de aquella contra quién prescribe, por escrito o por hechos indubitables.

Es necesario que se agregue, que cuando el reconocimiento se haga de palabra, por quien en cuyo perjuicio corre la prescripción.

Artículo 117. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les correspondan; el primer día se contará completo, y cuando sea inhábil el último, no se tendrá por - completa la prescripción; sino cumplido el principio, el primer día hábil siguiente:

Dicho precepto debió aclarar que los días inhábiles no se contarían cuando el término corra en perjuicio del empleado, no así es el Estado, pues entonces se incluyen hábiles é inhábiles, pero tampoco se previó esta situación de contar el plazo igual para unos y otros.

El ordenamiento laboral antes comentado, atendiendo al espíritu de nuestro Artículo 123 Constitucional, protector y nivelador de las relaciones de trabajo entre empleados y patrones, resulta incongruente con tales propósitos reguladores de justicia en favor de la clase desvalida, razón por la que nada justifica su regulación, en virtud de que nuestra Carta Magna previene las bases mínimas que significan la seguridad social para los empleados, por éello debe desaparecer de nuestra Legislación Laboral, pues lo único que se ha logrado es obstaculizar la justicia al restringir los derechos obreros, además de la forma como han sido redactados dichos preceptos que consideramos incorrecta, - debido a que también estipula términos iguales para desiguales empleado y patrón, que en el caso que se comenta, es diferente sobre todo políticamente, por lo que como se ha venido expresando a través de éstos renglones, resulta difícil que se logre su eli-

minación de los Códigos Laborales, al menos deseamos que, éstos concedan plazos diferentes y más amplios para nuestros obreros y en los que se cuente solo los días hábiles cuando el término prescriptorio transcurra en perjuicio de éstos, además que se obligue al Estado Patrón a que notifique por escrito a sus empleados, cuando éstos sean despedidos injustificadamente o justificadamente, en los casos de rescisión, terminación del Contrato de cualquier situación que provoque el ejercicio de los derechos del trabajador, indicándoles la fecha y la causa ó causas que originen el transcurso del término prescriptorio, con éllo se logra equilibrar un poco la seguridad de la clase desposeída y consecuentemente la justicia social de que habla el Artículo 2o. de nuestra Ley Federal del Trabajo.

e).- LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

Artículo 98. El derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible. Las pensiones - caídas, las indemnizaciones globales y cualquier -- prestación en dinero a cargo del Instituto que no re- clame dentro de tres años siguientes a la fecha en - que hubiere sido exigible, prescribirán en favor del Instituto.

Como su nombre lo indica "Le dé Seguridad", se ha denominado la presente, en virtud de que fué -- creada para garantizar la integridad física y social de los trabajadores así como todos áquellos servicios que eleven su nivel de vida, como de sus familiares, por éello no es posible que una Ley de esta naturaleza y principios, incluya en su articulado la prescripción de los derechos de los trabajadores, como lo previene el citado precepto en su parte segunda que viene a entrar en contradicción con la parte primera que no admite los efectos de dicha Institución, consecuentemente también con el espíritu nivelador previsto por nuestro Artículo 123 Constitucional.

Debe eliminarse pués, la prescripción contenida en esta Ley en su lugar aplicar preceptos que obliguen al Instituto a mantener en constante comunicación con los interesados en reclamar tales prestaciones, avisándoles que existe en su favor tal o cual derecho para que lo hagan valer, requiriéndolo para que acuda al referido Instituto para tales efectos.

No es posible que después de que dichos -- trabajadores vienen soportando la restricción de sus derechos que hace la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del Apartado -- "B" del Artículo 123 Constitucional, y también en la

Ley que venimos comentando se aplique la prescripción de sus derechos, pues ya es doble el daño que se les viene causando en esas condiciones a pesar de que tan to en una como en otra son totalmente contradictorias con los principios obreristas; las prestaciones a cargo del Instituto que no se reclamen dentro de tres años, prescribirán a favor de éste, lo que hace que haya contradicción en dicho Artículo, por é^llo ni aún las pensiones caídas deben estar sujetas a prescripción, pues el mismo está ordenando su imprescriptibilidad, y ésta debe comprender todas las prestaciones que dicho Artículo señala. Este precepto establece tres años para que el empleado ejercite sus derechos y diez años para el Instituto aludido, lo cual carece de fundamentación.

El Artículo 99. Los créditos respecto a los cuales el Instituto tenga el carácter de acreedor, cualquiera que sea su especie, prescribirán en diez años, a contar de la fecha en que el propio Instituto pueda, conforme a la Ley, ejercitar sus derechos.

Redacción que resulta un tanto imprecisa en su parte final, pues solo indica "que el término prescriptorio corre a partir de la fecha en que el propio Instituto pueda, conforme a la Ley ejercitar -

sus derechos"; primeramente debe aclarar a qué Ley - se refiere aunque suponemos que es a la que veníamos comentando por ser el cuerpo de leyes del cual forma parte dicho precepto legal que se analiza, el Instituto podrá reclamar sus derechos que al respecto le co- rresponda, a partir del vencimiento del término esti- pulado en un préstamo por ejemplo, pues en éstos casos siempre se señalan las condiciones y plazos en los - cuales debe sujetarse dicha operación, el plazo de - diez años debe reducirse a un año, con base en que el Instituto tiene personas que defiendan sus intereses del propio ISSSTE, exclusivamente dedicadas a éllo, - lo que justifica dicha reducción.

Artículo 100. Las obligaciones que - en favor del Instituto señala la presente Ley a cargo de las entidades y organismos públicos, prescribirán en el plazo de diez años a partir de la fecha que sean exigibles. La prescripción se interrumpirá por cual quier gestión de cobro.

Como en el presente caso no se afectan derechos de los empleados, solo nos concretamos a - agregar que se trata de dos personas morales que jurídica y económicamente son iguales, aunque por las finalidades sociales que persigue el ISSSTE, o sea el de la Seguridad Social, se justifica dicho término para que opere la prescripción.

La Ley de Seguridad Social, cumpliendo con los propósitos que inspiraron a nuestros Constituyentes de 1917 y que queda plasmados en nuestro - Artículo 123 del mismo ordenamiento, establece en su Artículo 3o. con carácter obligatorio una serie de prestaciones que vienen a garantizar la integridad social de nuestros servidores públicos, así como todos aquellos servicios que eleven los niveles de vida de dichas personas, las promociones que mejoren la preparación técnica y cultural, que activen las formas de sociabilidad del trabajador y de su familia, (Artículo 38) disponiendo de servicios que satisfagan las necesidades de educación, alimentación y vestido, de descanso y esparcimiento, resulta pues que la misma Ley restringe los derechos de los servidores públicos a través de la prescripción que - establece en su Articulado ya enunciado, opacando - con esto la finalidad social invocada, en tal virtud debe de desaparecer la delimitación que actualmente existe en perjuicio de los trabajadores.

f).- LEY DEL SEGURO SOCIAL.

Artículo 276. El derecho del Instituto a fijar en cantidad líquida los créditos a su favor, se extingue en el término de cinco años, no sujeto a interrupción ni suspensión, contando a partir de la fecha de la presentación por el Patrón del aviso

o liquidación o de aquella en que el propio Instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación.

Como el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene como finalidad exclusiva la seguridad social, garantizando así el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, es el instrumento básico de la seguridad social, establecida en favor de los trabajadores, por é^llo y para no obstaculizar y desvirtuar esa función niveladora, no debe prescribir el derecho del Instituto para fijar cantidades líquidas a los créditos a su favor.

Artículo 277. La obligación de enterar las cuotas vencidas y los capitales constitutivos, prescribirán a los cinco años de la fecha de su exigibilidad.

La prescripción se regirá en cuanto a su consumación e interrupción, por las disposiciones aplicadas en el Código Fiscal de la Federación.

Por su parte el Código Fiscal de la Federación, refiriéndose a la prescripción previene:

Artículo 32. Las obligaciones ante el -- Fisco Federal y los créditos a su favor por impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, se extinguen -- por prescripción en el término de cinco años. En el -- mismo plazo se extingue, también por prescripción, la obligación del fisco de devolver las cantidades paga-- das indebidamente. La prescripción del crédito principal extingue simultáneamente los recargos, los gas-- tos de ejecución y en su caso, los intereses. La prescripción se inicia a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento de las obligaciones pudieron ser legalmente exigidos, y será reconocida o declarada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a petición de cualquier interesado.

Este precepto se refiere a la prescripción del derecho sustantivo y que las partes debieron de hacer valer dentro del plazo previsto y al no hacerlo en esas condiciones, se tiene por perdido en su perjuicio.

Artículo 33. La prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro del acreedor', notificada o hecha saber al deudor o por el reconocimiento de éste, expreso o tácito, respecto de la existencia de la obligación de que se trate. De los requisitos señalados en este Artículo deberá existir constancia por escrito.

Dicho precepto nos indica la forma de interrupción de los efectos de la prescripción, y de - que debe existir constancia por escrito ya sea de la gestión, notificación o trámite que se realice para - interrumpir dicho plazo.

Artículo 168. Los particulares podrán - solicitar que se declare que ha prescrito algún crédito fiscal a su cargo, o que se han extinguido las facultades de las Autoridades para determinarlo o liquidarlo.

Si la Autoridad determina el crédito o realiza el cobro, sólo podrá ejercitarse los recursos establecidos en este Código o en las demás Leyes Fiscales.

El citado precepto, se refiere al ejercicio del derecho adjetivo del cual hacen uso los particulares para solicitar que se declare que ha operado la prescripción y consecuentemente ya no deben pagarlo, pues además se han extinguido las facultades de las - Autoridades para determinarlo o liquidarlo, según el caso.

Siguiendo con los Artículos relativos a - la prescripción, correspondientes a la Ley del Seguro Social, tenemos el siguiente:

Artículo 278. Las cuotas enteradas sin justificación legal, serán devueltas por el Instituto sin causar intereses, cuando sean reclamadas dentro de los cinco años siguientes a la fecha del entero correspondiente. El Instituto podrá descontar el costo de las prestaciones que hubiera otorgado.

Refiriéndose al Artículo 277, arriba señalado, manifestamos que la prescripción se justifica cuando sea el obrero quien resulte beneficiado, no así cuando sea el Patrón quien deba aportar la cuota al Instituto o deba enterar los capitales constitutivos. Cuando sea el obrero a quien haya que devolverle alguna cuota (artículo 278) no debe sujetarse su derecho a términos prescriptorios sino que el Instituto debe comunicárselo por escrito, haciéndole sa--ber que en dicha dependencia tiene a su favor determinada cantidad de dinero para que lo recoja, no así cuando sean los Patrones quienes hayan enterado determinadas cuotas injustificadas, porque entonces sí debe prescribir su derecho para ese fin.

Artículo 279. Prescribe en un año la obligación del Instituto de pagar a los interesados:

I.- Cualquier mensualidad de una pen--sión, asignación familiar o ayuda asistencial.

Este precepto vino a desarmonizar totalmente con los fines sociales de la presente Ley, al permitir la prescripción de los derechos de los obreros, de pensiones, asignación familiar o ayuda asistencia, -- pues no tiene cabida tal determinación legal puesto -- que es totalmente contraria a los fines que persigue -- la Ley del Seguro Social, por eso debe eliminarse tal perjuicio en contra de nuestros obreros, ya que siempre padecen en la mayoría de los casos los conflictos laborales, en tal virtud si las prestaciones a que se refiere esta Fracción prescriben en perjuicio de éste, -- debe ser imprescriptible como claramente lo ordena el Artículo 280 de este mismo ordenamiento.

II.- Los subsidios por incapacidad para el trabajo y por maternidad.

Prestaciones que la Ley del Seguro Social -- señala en sus Artículos 104, 105 y 109, que cuando sea el obrero o sus familiares los perjudicados en caso de prescribir sus derechos, no deben suceder así, pues como se viene repitiendo a lo largo de este trabajo, son derechos imprescriptibles, por lo que debe suprimirse esa anomalía ya que se trata de brindarle seguridad social íntegra, no de privar de los derechos a los trabajadores.

III.- La ayuda para gastos de funeral.

Otra de las prestaciones de carácter social que previene esta Ley, por lo que tampoco debe prescribir en perjuicio de los familiares del obrero o de quienes conforme a la Ley sean acreedores a dichas prestaciones.

IV.- Los finiquitos que establece la -
Ley.

Cuando tales finiquitos sean en favor - de los obreros, no deben prescribir sus derechos a - reclamarlos; además creemos que el Instituto debe - comunicarle esto a los interesados para que estén en posibilidades de reclamar sus aludidos derechos.

La obligación de pagar la dote matrimo- nial, prescribe en seis meses contados a partir de - la fecha de la celebración del Matrimonio.

Los contrayentes deben comunicarle al - Instituto, con la documentación anexa a la solicitud referente a dicho acto, para que éste se encuentre en condiciones de aportar dicha prestación, pues forma parte de la seguridad social contenida en la Ley que

nos ocupa, por lo que, este derecho tampoco debe prescribir en perjuicio de los obreros.

Artículos 280. Es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda o asignación familiar.

Este Artículo debió incluir todas las prestaciones que integran la seguridad social de los obreros mexicanos, no exclusivamente las que indica, pues la prescripción en sí significa arrebatarle sus derechos, restricción que obstaculiza que la seguridad social cumpla sus fines; por su parte el Artículo 279 ya comentado, ordena la prescripción de la obligación del Instituto de pagar a los interesados, cualquier mensualidad de una pensión, asignación o ayuda asistencial, con lo que surge notoria contradicción tan perjudicial para nuestros obreros mexicanos, que viene a crear el caos y falta de armonía jurídica.

En la exposición de motivos de nuestra Ley del Seguro Social de 1973, se dice lo siguiente... "Durante muchos años el movimiento obrero pugnó por-- que se promulgara la Ley del Seguro Social cuya expedición había sido declarada de interés público en la Constitución agregando que, las garantías sociales -- consignadas en el texto constitucional, y en particu-

lar las disposiciones del Artículo 123, están fundadas en el principio de considerar al hombre como -- miembro de un grupo social y no como sujeto abstracto de relaciones jurídicas. Conforme a esta concepción se estructuran en México: El derecho del trabajo, la seguridad social y, en un sentido más amplio, todos nuestros sistemas de bienestar colectivo.

Las sucesivas reformas que se han hecho - a la Ley han tenido propósito de avanzar hacia una seguridad social que sea integral, en el doble sentido - de mejorar la protección al núcleo de los trabajadores asegurados y de extenderla a grupos humanos no - sujetos a relaciones de trabajo. El Seguro Social - es un medio idóneo para proteger la vida y la dignidad del trabajador y, simultáneamente, una manera de elevar su salario, porque la sociedad industrial que México constituye, no podrá afianzarse ni prosperar si no mejora el nivel de vida de los trabajadores, - por é ello la seguridad social, como parte de esa política, precisa ampliarse, no solo por el imperativo - de proporcionar el bienestar de la comunidad, sino - como exigencia económica, ya que la redistribución - de la riqueza que promueve, no frena el crecimiento, sino por el contrario, lo impulsa de manera real y - sostenida. Mientras el hombre no disponga de elemen

tos para superar sus limitaciones materiales y culturales, no podrá alcanzar su plena productividad. La seguridad social es una de las más sobresalientes - conquistas de la Revolución Mexicana; en cuanto a - nuestros campesinos, se comenta sobre la extensión - de la seguridad social. A fin de que pueda acele--rarse la extensión de la seguridad social al campo - y se incremente, así sea en forma gradual pero cons--tante, el número de campesinos que disfruten de ella sea mayor.

En su articulado de la Ley de que se tra--ta, vemos que con ese orden de ideas de la seguridad social en favor de nuestros obreros quedando plasma--dos en esos términos, así sucede que en su Artículo 2o., ordena que la seguridad social tiene por finali--dad garantizar el derecho humano a la salud, la asigtencia médica, la protección de los medios de subsis--tencia y los servicios sociales necesarios para el - bienestar individual y colectivo agregando en su ar--tículo 4o., que el Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social establecido como un - servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley.

Dicho ordenamiento garantiza la integridad física, cultural, social y la dignidad humana de nues--tros obreros, que los viene a considerar como perso--

na humana, sujeta a principios jurídicos y que necesariamente debe tener la protección de la Ley. Los trabajadores han venido arrastrando en su perjuicio la prescripción de sus derechos que la Ley Federal - del Trabajo establece y que como hemos expresado en la elaboración de este trabajo, que desaparezca dicha Institución, pues se trata de un Código con fines netamente sociales, como lo es la presente Ley en -- que tampoco se justifica que admita que los derechos de los trabajadores también estén sujetos a términos prescriptorios, lo que hace que éstos por doble partida soporten tal situación y que en nada concuerda con los propósitos de ambas leyes que es la seguridad social, en la exposición se argumenta.... Se re ordenan y agrupan las disposiciones que sobre estas materias contiene en forma dispersa la Ley vigente, con objeto de alcanzar una adecuada sistematización que facilite la consulta y la aplicación de los preceptos, nosotros más bien consideramos que la siste matización de las leyes se logra aplicando preceptos que no restrinjan los derechos, sino que por el contrario faciliten a los obreros su ejercicio oportuno e inmediatamente en que éstos puedan reclamar dichos beneficios, sin ponerle banderillas, pues por una - parte se procura su integridad y seguridad social, - y por otra en los mismos ordenamientos se restrinjan sus derechos, lo que no tiene cabida en normas de -

esta naturaleza que solo procuran la protección social y de la dignidad humana, consecuentemente debe eliminarse tal irregularidad.

CAPITULO QUINTO.

**LA CADUCIDAD EN LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.**

- a).- Regulación en la Ley de la ma
teria.
- b).- Opinión del maestro Trueba Ur
bina.
- c).- Diferencias.

LA CADUCIDAD DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

a).- REGULACION EN LA LEY DE LA MATERIA.

La Ley laboral de 1931, en su artículo 479 estipula-
da:

"Se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. La Junta de oficio una vez -- transcurrido ese término dictará la resolución que corres- ponda".

No procederá el desistimiento cuando el término transcurra para el desahogo de diligencias que deban practicar -- se fuera del local de la Junta que conozca de la demanda, -- o para la recepción de informes o copias certificadas, en -- los términos del artículo 523.

Artículo 523.- Las pruebas que por su naturaleza no -- puedan ser desahogadas desde luego, o en que para hacerlo -- requieran la practica de una diligencia p evia, deberán -- ser propuestas por las partes en la audiencia de pruebas.

Lo mismo se entenderá respecto de los informes y copias certificadas que haya de expedir alguna Autoridad, siempre que, el que la ofrezca no esté en posibilidad de obtenerlas directamente.

Como puede observarse, el primero de los preceptos citados a todas luces es anticonstitucional, - pues autoriza a la Junta a dictar la resolución anticonstitucional, ya que violaba el derecho de audiencia que establece nuestra Carta Magna en favor de todos los mexicanos, dicha deficiencia se suplió con lo estipulado por el Artículo 727 de nuestra Ley que ordena: Cuando se solicite que se tenga por desistido el actor de las acciones intentadas, la Junta citará a las partes a una audiencia, en la que después de oírla y recibir las - pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia del desistimiento, dictará resolución; con ésto se vino a devolver a los trabajadores lo que la misma Ley les había arrebatado.

B).- OPINION DEL MAESTRO TRUEBA URBINA.

El maestro Alberto Trueba Urbina, refiriéndose se a la caducidad de los derechos obreros, hace el siguiente comentario: "Subsiste la indebida caducidad - del proceso laboral, no obstante que las mismas normas de éste se consideran por la Ley como de orden público,

por cuyo motivo nunca podría presentarse el caso de la caducidad, porque las Autoridades del Trabajo están -- obligadas a cumplir con las disposiciones procesales -- de la Ley, aplicando las normas de procedimiento y con tinuando de oficio el proceso. Sin embargo la perspicacia del legislador al redactar la disposición que se comenta, mitiga los efectos de una Institución que no debe formar parte del derecho procesal del trabajo por la naturaleza social de éste y porque la caducidad siem pre ha obedecido a que las Autoridades dicten sus reso luciones dentro de los términos de la Ley o no practiquen las diligencias respectivas, en cuyo caso se consuma en perjuicio del trabajador la caducidad, lo cual no ocurrirá ahora. Por otra parte, antes de que se de clare el desistimiento de la acción deberá tramitarse el incidente respectivo en los términos del Artículo -- que sigue (727), que sin duda entraña una especie de -- garantía de audiencia para el trabajador".

La Suprema Corte de Justicia, refiriéndose al contenido del Artículo 479 (ahora 726) de la Ley Fe deral ~~de~~ Trabajo, emitió la tesis en los siguientes tér minos: OBJETO DEL ARTICULO 479 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- Tiene por objeto resolver los asuntos de -- trabajo brevemente; no contraria el Artículo 123 Constitucional por no implicar renuncia de derechos de los trabajadores; no es un término más concreto de prescrip

ción, pues se trata de desistimiento de la acción y no de renuncia de los derechos. La declaración de desistimiento procede de oficio solamente cuando después de haberse intentado la acción, se ha dejado de promover en el término de tres meses. E. S. J. F. T. XLIII, Página 1745. E. S. C. J.- Martínez Bárbara, S. 23 de Mayo de 1935.

Dicho Tribunal señala que se trata de desistimiento de la acción y no de renuncia de los derechos, por lo que no se contraría el Artículo 123 Constitucional; criterio que no compartimos, porque la Ley Federal del Trabajo está autorizando a los Tribunales Laborales a no cumplir con la obligación que tienen de continuar de oficio el proceso, aplicando las normas del procedimiento, hasta su total resolución y ejecución del laudo respectivo, lo que ha traído como consecuencia que al obrero se le obli- que en su perjuicio a que se tenga por desistido de la acción cuando no haga promoción dentro del término de (antes tres) seis meses, situación idéntica a la renuncia de los derechos que en su beneficio - estipula el mencionado Artículo Constitucional en - su Fracción XXVII inciso H, especialmente al señalar que son nulos todos los Contratos y Convenios - así como todas las demás estipulaciones que impli- quen renuncia de algún derecho consagrado a favor - del obrero en las leyes de protección y auxilio a - los trabajadores.

Otra tesis sustentada por nuestro máximo Tribunal, en la que manifiesta su total acuerdo y conformidad con la institución de la caducidad, aludiendo que ésta es una sanción a quienes teniendo la obligación de impulsar el procedimiento, actor y demandado, no lo hacen; TERMINACION DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, DESISTIMIENTO TACITO POR FALTA DE PROMOCION.- - La Ley Federal del Trabajo, permite en parte el procedimiento inquisitivo; pero esto no implica que las partes o litigantes se encuentren librados de las cargas procesales de impulsión, pues tienen la obligación de activar el procedimiento y hacer las promociones necesarias para su desarrollo normal so pena de la sanción contenida en el Artículo 479 (ahora 726) de la Ley Federal del Trabajo, debe aplicarse después de haber sido intentada la acción, ésto es, a partir del momento en que el Actor requiere la actividad jurisdiccional de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para resolver el conflicto que plantea y cuando la Junta ha llamado a la contra parte para la substanciación de los procedimientos inherentes, de tal suerte que, después de presentada la reclamación escrita o formulada ante la propia Junta y citado el demandado al procedimiento conciliatorio, es aplicable el precepto de referencia. Quinta época. Tomo LXXXVII. Páginas 1087, 3286, 1843 y 3190.

Dicha jurisprudencia no tiene mayor comentario pues únicamente indica que el término para -

que se tenga lugar la caducidad es a partir del momento en que el demandado es emplazado a juicio.

El motivo que nos indujo a comentar brevemente la caducidad de los derechos de los trabajadores, es porque tanto ésta como la prescripción previstas en la Ley Federal del Trabajo, van contra el principio social y humano del Artículo 123 de nuestra Constitución, que garantiza y protege sus derechos, por lo que debe desaparecer de nuestra Legislación Laboral.

La Ley Laboral anterior como la actual, además de injustificada e infundada, erróneamente se denomina desistimiento tácito de la acción, a la caducidad de la instancia, conceptos jurídicos completamente diferentes, que se refieren a hechos y situaciones jurídicas también diversas, por eso la forma de redacción que tiene actualmente el Artículo 726 al señalar que se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción en el término de seis meses por lo que dicho desistimiento equivale a la renuncia de ese derecho. El Maestro Eduardo Pallares, en su Diccionario Procesal Civil, expresa los siguientes conceptos de abolengo civilista y adaptados a nuestro Código Laboral:

CADUCIDAD.- Sinónimo de Prensión. La caducidad es la extinción de la instancia judicial porque las dos partes abandonen el ejercicio de la

acción procesal. El abandono se manifiesta en que ninguna de ellas hace en el proceso las promociones necesarias para que éste llegue a su fin.

DESISTIMIENTO EN GENERAL.- El desistimiento consiste en el acto de desistirse. Si se trata del desistimiento de la demanda, la persona que se desiste - pierde todos los derechos y situaciones procesales favorables a ella que se han producido en la instancia - y ésta se sobresee. Si se trata del desistimiento de la acción además del efecto anterior, se produce la -- pérdida del derecho que el Actor hizo valer en el juicio, porque al renunciar a la acción, se renuncia al - derecho que mediante ella se hizo valer.

DESISTIMIENTO DE LA ACCION.- Es el acto procesal por medio del cual el Actor renuncia a la acción que ha ejercitado en el juicio. Como la palabra acción en este caso está tomada en el sentido del derecho subjetivo que el Actor pretende tener contra el demandado, es evidente que el desistimiento de la acción equivale a la renuncia de ese derecho. El Actor se puede desistir de la acción sin que sea necesario que el demandado le otorgue su consentimiento para que el desistimiento sea efectivo. Lo contrario se exige cuando se trata del desistimiento de la demanda. El desistimiento de la demanda produce los efectos de la caducidad de -

la instancia, o sea que se considera que el proceso no ha existido, que tal es el alcance de la siguiente frase que usa el Artículo 34: "En todos los casos, el desistimiento produce el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda". Por lo tanto, se extinguen "de pleno derecho", los efectos jurídicos de todos los actos procesales realizados en el juicio.

Desistimiento de la instancia.- Igual a desistimiento de la demanda.

Conceptos todos ellos civilistas cien por ciento y en donde si tienen cabida legal, no así en materia laboral que nada justifica su aplicación, como es el caso de la prescripción y caducidad que solo fueron introducidas a nuestra Ley Laboral para perjudicar a nuestros obreros, restringiendo con éllo sus elementales derechos, por lo que dichas instituciones deben de desaparecer de este Código.

Refiriéndonos concretamente a la caducidad, y a los términos como ha quedado regulada en los ya mencionados Artículos 726 y 727, estimamos que el primero es anticonstitucional, porque como puede observarse en las definiciones antes señaladas, el desistimiento de la acción equivale a la renuncia de ese derecho, contrariando tajantemente al Artículo 123 Constitucional

principalmente en su Fracción XXVII que sanciona como nulos todos los contratos y convenios, así como todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de al gún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores; contradicción que aún existe dentro de la misma Ley Federal del Trabajo, como se observa en los siguientes pre ceptos legales; el Artículo 2o. establece: Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y Patrones; por su parte el artículo 5o. previene que las disposiciones de esta Ley son de orden público, - por lo que no producirá efecto alguno, las disposicio nes en contrario que perjudiquen los derechos de los trabajadores y para la interpretación de las normas - de trabajo se tomarán en consideración sus finalida-- des señaladas en los Artículos 2o. y 3o. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador (Artículo 18); normas que siguen el princi pio social de nuestro Artículo 123 Constitucional, pe ro el precepto 726 del Código Laboral contradice total mente a esos principios obreristas que protegen a la dignidad humana, por ello dicho Artículo como antes - dijimos, debe de desaparecer y en su lugar que se redacte otro en el que se obligue a las Autoridades del Trabajo a cumplir con las disposiciones procesales de la Ley, aplicando las normas de procedimiento y conti

nuándo de oficio el proceso hasta que en tanto se dicte y ejecute el laudo correspondiente concluyéndose totalmente el juicio. En perjuicio del trabajador no debe haber precepto alguno que regule la caducidad de la instancia, mucho menos que por medio de la caducidad se tenga por desistido de la acción, o sea la pérdida del derecho subjetivo que como es el caso que nos ocupa, implica también la pérdida del derecho objetivo; se requiere pues, que nuestros Legisladores tengan más cuidado al estudiar y aprobar las leyes, ya que tienen como Patrón y norma Suprema a nuestra Constitución Mexicana.

Dada la confusión a que constantemente se presta la caducidad con la prescripción, nos permitimos brevemente sus diferencias y similitudes, - empezando por las primeras.

C).- DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON LA PRESCRIPCIÓN.

1.- La caducidad se hace valer de oficio por la Autoridad llegado el caso, pudiendo ser también a petición de parte; la prescripción no puede hacerse valer de oficio.

2.- La caducidad se establece por la Ley, también puede ser convencional; la prescripción sólo se fija por la Ley.

3.- La caducidad opera en el derecho sustantivo o subjetivo como en el procesal o adjetivo; la prescripción solo opera en el campo del derecho procesal, a pesar de que si bien es cierto que el derecho sustantivo fija los derechos de los particulares entre ellos el de la prescripción, es el derecho adjetivo el que señala la forma de hacer efectivos esos derechos.

4.- La caducidad procesal no extingue la acción, solamente la instancia; la prescripción unida a una sentencia sí extingue la acción cuando se hace la declaratoria judicial de ella. Cabe hacer notar de acuerdo a la redacción del Artículo 726 de la Ley Federal del Trabajo, la caducidad procesal sí extingue la acción, hecho que únicamente en materia laboral sucede, lo que se traduce en antagonismo y antijurídico a todas luces, como ya se ha hecho mención en páginas anteriores.

5.- La caducidad extingue derechos sustantivos, reales o personales; la prescripción no extingue derechos personales.

6.- La caducidad opera sin la existencia de una relación acreedor-deudor; la prescripción no opera si no se dá esa relación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación,

en la tésis que a continuación se describe, señala algunos datos sobre el particular.

Caducidad y prescripción de derechos en materia laboral.

Si un Contrato Colectivo establece que el trabajador que se sienta postergado por haber asignado indebidamente una vacante a otro, debe reclamar - ante el Patrón en cierto plazo, y si el trabajador llegado el caso no reclama en tiempo prudente su derecho, y no puede ir ante la Junta competente a deducirlo, lo que significa que tal derecho haya prescrito, pues caducidad y prescripción son nociones diversas, ya que - mientras la primera consiste en la pérdida del derecho por no haber realizado el acreedor determinados actos que la Ley o el Contrato en que se haya originado establezcan la segunda es también la pérdida del derecho - pero por el simple transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor al no ejercitarlo. Amparo Directo. - (Ejecutoria) 324/1956. León Jiménez Pérez. 9 de Diciembre de 1952. 4a. Sala. Boletín 1958. Página 29.

Dicho Tribunal expresa que Caducidad, - consiste en la pérdida del derecho por no haber realizado el acreedor determinados actos que la Ley o el -- Contrato en que se haya originado establezcan, y pres-

cripción es también la pérdida del derecho pero por el simple transcurso del tiempo y la inactividad del acree dor al no ejercitarlo; más que diferencias, son lo - que hace que dichas instituciones que sean similares, por el que con esa diferenciación que nuestro Máximo - Tribunal pretendió establecer con la mencionada tésis, estimamos que nada se dijo, pues inactividad de una de las partes y el transcurso de cierto tiempo, para que opere la caducidad y la prescripción, es lo que las ha ce similares.

SIMILITUDES:

1.- En las dos se requiere la inactivi--
dad de parte interesada en el ejercicio de un derecho.

2.- En ambas se requiere que esa activi-
dad se prolongue por cierto tiempo.

3.- Establece igual término para obreros
y Patrones, o sea tratan igual a los desiguales, como
sucede en nuestra Ley Federal del Trabajo, que además
resulta infundada e injustificada de su regulación.

C O N C L U S I O N E S.

El derecho del trabajo es derecho social
e imperativo, pues contiene normas de conducta cuya --

observancia se encuentra garantizada por el Estado, de ahí que toda violación al citado orden es susceptible de ser reparada directa o indirectamente por el poder coactivo del Estado y de esa manera garantizar en favor de la clase trabajadora sus derechos fundamentales.

Imperatividad que al regular las relaciones laborales entre el Capital y Trabajo, por una parte se dirige a cada trabajador y a cada Patrón con motivo de las relaciones que surjan entre ambos, y por la otra el Estado, en cuanto que lo obliga a vigilar - que esas relaciones se formen y se rijan en los términos previstos por el artículo 123 Constitucional. Social por cuanto a los fines que persigue que son de garantía, protección en pro de la clase obrera mexicana y equilibrador y nivelador en las mencionadas relaciones.

El Artículo 123 nació y surgió como un - grito de Libertad de nuestra clase Trabajadora mancilla da y esclavizada, consecuentemente cansada de los abusos y atropellos de que era víctima por parte de los - Patrones, exigió respeto a su dignidad e integridad fisica y social para que recibiese un trato como persona humana, más no como un objeto sujeto al comercio. Por é~~l~~lo vemos como nuestros Señores Constituyentes de -- 1917, interpretando fielmente el sentir é ideología de

esa clase desposeída plasmaron en el aludido precepto Constitucional, los derechos fundamentales como una - garantía social en su auxilio y protección.

El espíritu y principios obreristas contenidos en el Artículo 123 Constitucional, significan una garantía social para los obreros y una obligación que cumplir para los Patrones, así como para el Estado el vigilar su estricta aplicación y observancia, dichos principios constituyen el mínimo de garantías, pues - todo convenio, contrato o cualquier estipulación que impliquen renuncia, auxilio y protección a los trabajadores, son nulas y no obligarán a los contrayentes; no producen efecto legal alguno aunque lo haya aceptado el trabajador, como lo previene el citado Artículo de nuestra Carta Magna, en su fracción XXVII.

Con fundamento en el origen y principios que contiene el Artículo 123 Constitucional obrerista cien por ciento, una garantía protectora en su beneficio, - regulando y equilibrando las relaciones Capital-Trabajo, y consecuentemente un nivel de vida social digno y justo para nuestros trabajadores; en tal virtud no tienen cabida en el derecho del trabajo Instituciones de precedencia civilista como son la prescripción y - la caducidad que en perjuicio de esta clase, los Señores Legisladores incluyeron en la mencionada Ley Labo

ral, desvirtuando con ello los fines y espíritu previstos en el citado precepto Constitucional, opacando y obstaculizando el estricto cumplimiento del mismo, además de que se restringen los derechos de la clase desposeída, resultando anticonstitucionales dichas instituciones pues contravienen a lo ordenado por el citado precepto de nuestra Constitución Mexicana principalmente en lo indicado en su Fracción XXVII, porque incluir en el derecho del trabajo la prescripción y la caducidad de los derechos obreros, implica a nuestro juicio renuncia de los derechos obreristas, ya que en tales circunstancias se estipulan condiciones que van más allá de las garantías sociales mínimas que en su favor previene el multicitado precepto Constitucional. En cambio los derechos de los Patrones sí es factible que se sujeten a términos prescriptorios y de caducidad, dada la naturaleza social y política así como económica que los ubica desigual y superior totalmente frente a los obreros.

Deben, pues, eliminarse de nuestros Códigos Laborales dichas Instituciones de rancio abolengo civilista como lo expresa el maestro Trueba Urbina, ya que nada justifica su inclusión y regulación en el derecho del trabajo como en las leyes de Seguridad Social (Ley del ISSSTE y del IMSS), resultan con

tradictorias e incongruentes dada su naturaleza y al cance, con los principios proteccionistas de nuestra clase obrera, contenidos en el citado Artículo 123, así como el Articulado que en cada uno de los Códigos señalados se previenen.

Eliminación que debe hacerse por lo ya expuesto, y, en su lugar incluir diversos Artículos que vengan a establecer un ambiente de comunicación constante Obrero-Patrón y Estado, y cada quien cumpla con sus obligaciones o ejercite sus derechos laborales en la medida y términos que se dé fiel cumplimiento - a lo estipulado por el Artículo 123 Constitucional.

Estimamos que tanto la prescripción como la caducidad en perjuicio de la clase obrera, prevista en las siguientes leyes, y que debe hacerse por los siguientes motivos, (Ley Federal del Trabajo, - Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del ISSSTE y del IMSS, la primera regula las dos instituciones, las tres últimas solo a la prescripción).

1).- Tanto la prescripción como la caducidad de los derechos de los obreros, carecen de fundamentación constitucional, en virtud del origen y

principios obreristas previstos en el Artículo 123 de nuestro Máximo Código.

2).- Ambas son totalmente incongruentes y contradictorias con los principios y espíritu en favor de la clase obrera, consagrado en el citado precepto Constitucional, y aún con el Artículo que contiene cada una de las siguientes leyes: Ley Federal del Trabajo (Regula a la prescripción y a la caducidad, las tres leyes siguientes solo regulan a la prescripción), Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del IMSS y del ISSSTE.

3).- Dichas Instituciones además de indebida su regulación, injustificadamente se trata a poseedores y a desposeídos, o sea al Capital y al Trabajo siendo ésto totalmente contrario a nuestro Artículo 123 Constitucional, que precisamente partiendo de la desigualdad que existe entre ambos, nació dicho precepto.

4).- Los efectos que tanto la prescripción como la caducidad producen, son totalmente diferentes en los obreros y en los Patrones, pues para los primeros son fatales y mínimos para éstos últimos, porque el obrero dada su situación social,

política y sobretodo económica, inferior completamente respecto del capital, además de que siempre trae consigo y permanentemente múltiples necesidades vitales para los desposeídos, como son la alimentación y la salud de él y de su familia; mientras que para los Patrones significa una pequeña consecuencia en su capital, pues sus necesidades son otras como son la principal, aumentar su capital en consecuencia no emergentes como sucede a los obreros, resulta pues fácil medir cuáles son y en qué medida perjudican a cada uno, los efectos de las citadas Instituciones.

5).- Refiriéndonos primeramente a la --- prescripción que regula la Ley Federal del Trabajo, como antes señalamos resulta anticonstitucional, - también contraria a su propio Articulado del referido Código Laboral, como se desprende de los siguientes preceptos; en su Artículo 2o. previene - que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y Patrones, y agrega en su precepto 3o., que el trabajo es un derecho y un deber social. No es Artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quién lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el

trabajador y su familia, indicando en su Artículo 5o. que las disposiciones de esta Ley son de orden público y no producirán efecto legal alguno; las estipulaciones en contrario, y que en la interpretación sus finalidades señaladas en sus Artículos 2o. y 3o. En caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Lo mismo sucede con la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123. Consecuentemente debe eliminarse en perjuicio de la clase obrera dicha restricción, y en su lugar establecer principios más acordes con el citado precepto Constitucional obligando al Patrón a comunicar por escrito a los trabajadores, la fecha y causa o causas de la terminación o rescisión del Contrato o del despido, sea justificado o no, lo mismo para el Estado con sus trabajadores, estableciendo relaciones más comunicativas entre ambos factores Obrero-Patrón y Autoridades del Trabajo.

6).- En cuanto a la prescripción que regulan la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley del Seguro Social, eliminar también de su articulado dicha restricción en perjuicio de los -

obreros, estableciendo preceptos en su lugar que -- obliguen a dichas Instituciones Oficiales a cumplir integralmente con sus funciones y finalidad para las que fueron creadas, ordenándose que comuniquen por escrito a los interesados en reclamar sus derechos correspondientes y requiriéndolos en todo caso para que acudan a hacer valer sus derechos e indicándose les cuales y cómo lo puedan hacer para obtener las prestaciones respectivas.

7).- En cuanto a la caducidad que previene la Ley Federal del Trabajo en perjuicio de los trabajadores, debe eliminarse también, y en su lugar normas que obliguen a las Autoridades del Trabajo a cumplir con las disposiciones de la Ley, -- aplicando las normas del procedimiento y continuando de oficio el proceso.

8).- Los trabajadores de gobierno como los obreros vienen soportando el doble perjuicio en sus derechos, debido a la regulación de la - prescripción de sus derechos que se hace para los - primeros en la Ley Federal de los Trabajadores del Estado y en la correspondiente Ley del ISSSTE, para los segundos la prevista en la Ley Federal del Trabajo y en la del Seguro Social, doble contradicción y doble perjuicio en agravio de los trabajadores, -

admitido y legislado por los Señores Senadores y Diputados.

9).- Nuestro Artículo 123 Constitucional no previene sanciones para la clase trabajadora, pues no ordena que se restrinjan sus derechos, sino que - por el contrario reglamentar su exácta aplicación en atención a sus lineamientos y contenido, porque solo de ésa manera puede aplicarse la justicia social a - que se refiere el Artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo, en un ambiente comunicativo entre los diversos elementos que intervienen en las relaciones laborales, Autoridades del Trabajo e Instituciones de Seguridad Social, Patrones y Obreros, manteniendo a - éstos últimos bién informados de sus derechos y obligaciones correspondientes, para que en cualquier momento que sea necesario pueda hacer valer sus derechos, sin sujetarlos a restricciones a como son las prescripciones y la caducidad, regulada en su perjuicio.

10).- En la inmensa mayoría de los conflictos de trabajo que se originan, es debido al incumplimiento de las obligaciones que las Leyes laborales - señalan a los Patrones, por tal motivo los afectados son siempre los obreros, y si a ésto todavía agregamos la regulación en su perjuicio, de la prescripción de la caducidad que éstas hacen indebidamente.

Nuestra opinión firme y tajante ha sido que tanto la prescripción como la caducidad, a que - están sujetos los derechos de la clase obrera, en - los diversos cuerpos de Leyes que en párrafos ante-- riores señalamos y que son en perjuicio de éstos, de ben ser eliminados de esas leyes; en cambio los de-- rechos patrimoniales de los Patrones sí deben regu-- larse en esos términos, dada su ubicación superior que guardan frente al obrero, comentario que realiza mos en la elaboración del presente trabajo. Pero - mientras suceda dicha eliminación, al menos creemos que el plazo prescriptorio concedido a los trabajado res y a los Patrones debe ser necesariamente diferen te en cuanto que para los primeros sea más amplio, - diez años por ejemplo, y dos meses para los segundos, y en cuanto a la forma de computar dicho término, - cuando perjudique los derechos ó intereses de los -- obreros y corresponda a éstos hacer valer sus derechos respectivos, solo se incluyan los días hábiles, sin embargo cuando sea en perjuicio del Patrón tal como lo previene actualmente nuestro Código Laboral inclu yendo también los inhábiles; así aunque sea en una - mínima proporción, se devuelva a los desposeídos par te de sus derechos que la misma Ley Federal del Tra-- bajo arrebató al regular dichas Instituciones restric tivas y también en esa medida nivelar las relaciones Capital y Trabajo a que también hace mención el Artícu lo 2o. del mismo ordenamiento.

B I B L I O G R A F I A

- 1.- Cabanellas G. Derecho Normativo Laboral, Editorial Bi
bliográfica Omega, Buenos Aires, Argentina 1966.
- 2.- Castorena J. Jesús, Manual de Derecho Obrero, México-
1984.
- 3.- Cavazos Flores Baltazar, El Derecho del Trabajo en la
Teoría y en la práctica, Ediciones de la Coparmex, Mé
xico 1971.
- 4.- De Ferrari Francisco, Derecho del Trabajo, Volúmen I,
Editorial de Palma, Buenos Aires Argentina, Segunda -
Edición 1968.
- 5.- De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Edi-
torial Roma, S.A. México 1938.
- 6.- De la Cueva Mario, Nuevo Derecho del Trabajo, Edito--
rial Roma S.A. México 1970.
- 7.- Floris Margadant S. Guillermo, El Derecho Romano, Edi
torial Esfinge S.A., México 1960.
- 8.- García Maynes Eduardo, Introducción al Estudio del De
recho, Editorial Porrúa, México 1968.
- 9.- Garizurieta González, Jorge M., Ensayo de la Programa
ción al Segundo Curso de Derecho del Trabajo en las -
Universidades, Facultades y Escuelas de México, Edito
rial Grijalvo S.A. México 1981.
- 10.-Guerrero Euquerio, Manual de Derecho del Trabajo, Edi
torial Roma S.A., México 1973.
- 11.-Muñoz Luis, Comentarios a la Ley Federal del Trabajo,
Editorial Roma S.A., Volúmen IV, México 1948.
- 12.-Muñoz Ramón Roberto, Derecho del Trabajo, Tomo I, Edi
torial Porrúa, México 1976.
- 13.-Petit Eugene, Tratado Elemental de Derecho Romano, --
Editorial Nacional, México 1966.
- 14.-Pallares Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Ci-
vil, Editorial Roma S.A., México 1971.
- 15.-Ponomariov B., El Movimiento Obrero Internacional. --
Historia y Teoría, Tomo IV, Editorial Progreso, Moscú
1984.
- 16.-Planiol Marcel, Ripert Georges, Tratado Elemental de-
Derecho Civil, Editorial Cárdenas, Tomo IV, México --
1983.

- 17.- Russomano V. Mozart, Principios Generales de Derecho Sindical, Ediciones del Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1977.
- 18.- Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Del Trabajo, - Editorial Porrúa, S.A. México, 1973.
- 19.- Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Procesal Del Trabajo, Editorial Porrúa S.A. México, 1973.
- 20.- Trueba Urbina Alberto, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal del Trabajo, Editorial Porrúa - México, 1965.

LEYES CONSULTADAS:

- 1.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
- 2.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931.
- 3.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970.

LEGISLACION CONSULTADA:

- 1.- Jurisprudencia y tesis sobresalientes de 1966 a 1970, actualización II, Editorial Mayo, pag 48.
- 2.- Jurisprudencia, tesis de 1955 a 1963, pag 234.
- 3.- Diario de los Debates del Congreso Constituyente, - Tomo I, pag 716 a 740.
- 4.- Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, 1917-1954, Tomo III, pag 1454, tesis 191.